

ABRIL 24 DE 1919

112.<sup>a</sup> REUNION — 32.<sup>a</sup> SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES D. ARTURO GOYENECHÉ

Y Dr. D. VALENTIN VERGARA

MINISTRO PRESENTE DE OBRAS PÚBLICAS: Dr. D. Pablo Torelo. DIPUTADOS PRESENTES: Agote Luis, Aldao Ricardo, Arámburu Juan B., Arancibia Rodríguez A., Aranda Macedonio, Atencio Juan V., Avellaneda Marco Aurelio, Avellaneda Nicolás A., Barceló Alberto, Barco Jerónimo del, Becú Carlos A., Beiró Francisco, Bermúdez Manuel A., Bonifacio Benjamín, Bravo Mario, Bunge Augusto, Breard Eugenio E., Cabrera Enrique, Caracoché Pedro, Carranza Wenceslao C., Carrasco Alejandro M., Corvalán Santiago E., Daneri Luis M., Davel Ricardo J., Demaría (hijo) Mariano, Dickmann Enrique, Escobar Adrián C., Ferrarotti Juan Luis, Ferreyra (hijo) Andrés, Gallegos Moyano Carlos, Gallo Vicente C., Garat Damián P., Garro Allende Juan E., Gatica Teófilo I., Gibert Pedro F., Goyeneche Arturo, Hernández Sabá Z., Iriondo Néstor de, Isnardi Arturo, Jaramillo José M., Jiménez Beltrán Dámaso, Lagos Lauro, Lehmann Guillermo, Maidana Julián, Martínez Enrique, Melo Carlos F., Méndez Casariego Alberto, Moreno J. Alejandro, Moreno (hijo) Rodolfo, Mosca Enrique, Núñez Rafael, O'Farrell Juan, Oliva Moisés J., Padilla Eduardo, Pagés Pedro T., Pérez Virasoro E., Pradère Carlos M., Raffo de la Reta Julio C., Repetto Nicolás, Riú Francisco A., Rodríguez Alfredo, Rodríguez Carlos J., Sánchez Sorondo Matías G., Solanet Pedro, Solari Benjamín T., Sosa Leopoldo, Tamborini José P., Vaca Narvaja Jesús, Valle Delfor del, Vergara Valentín, Villarroel Agustín J. DIPUTADOS AUSENTES: CON LICENCIA: Anquín Ireneo de, Cornejo Julio, Galíndez Francisco R., Justo Juan B., Massa Arturo H., Padilla Ernesto E., Páez José E., Remonda Mingrand F., Tomaso Antonio de. CON AVISO: Araya Rogello, Costa Julio A., Fernández Jacinto, Molina Víctor M., Quiroga Marcial V., Sánchez Bustamante T., Santamarina Antonio. SIN AVISO: Arjón Miguel A., Arce José, Berrondo Valentín, Caballero Ricardo, Cabrera Anibal, Cordero Octavio, Cornet Pedro L., González José Antonio, Hernández Diógenes, Leguizamón Arturo, Martínez José María, Martínez Zuviría Gustavo, Montes José Antonio, Mouesca Eduardo M., Puch Angel E., Robín Castro Napoleón, Rodríguez Jorge Raúl, Rubilar Francisco, Usandivaras Agustín, Vera Octaviano S., Vidart Roberto, Videla Horacio A., Zalazar José María.

## SUMARIO

- 1.—Apruébase el acta de la sesión anterior.
- 2.—Moción pendiente del señor diputado Nicolás Repetto, de juicio político al señor ministro de agricultura.
- 3.—Moción pendiente del señor diputado doctor Julián Maidana para que la honorable cámara se constituya en sesión permanente.
- 4.—Mensaje y proyecto de ley del poder ejecutivo por el que se abre un crédito suplementario al departamento de obras públicas por la suma de pesos 23.227.40 para pago de cuentas de ejercicios vencidos.
- 5.—Mensaje del poder ejecutivo, por el que se solicita se modifique en la ley de presupuesto el artículo respectivo; a fin de que los sueldos menores de 120 pesos no sufran descuento.
- 6.—Asuntos entrados varios.
- 7.—Proyecto de ley de varios señores diputados, con fundamentos del doctor Jerónimo del Barco, por el que se acuerda jubilación al profesor don Maximio F. Victoria.
- 8.—Proyecto de ley del señor diputado

- doctor Marcial V. Quiroga, por el que se autoriza al poder ejecutivo a entregar 150.000 pesos a la facultad de medicina con destino a la fundación del instituto nacional de radio.
- 9.—Proyecto de ley del señor diputado doctor Víctor M. Molina, sobre salario mínimo del trabajo y agremiación obligatoria.
- 10.—Licencia para faltar a sesiones concedida al señor diputado doctor Ernesto E. Padilla.
- 11.—Minuta del señor diputado doctor Luis Agote, en que solicita informes del poder ejecutivo respecto de la huelga de estudiantes.
- 12.—Continúa la exposición del señor diputado doctor Nicolás Repetto a que se refiere el número 2, quedando pendiente.
- 13.—La honorable cámara resuelve constituirse en sesión permanente hasta terminar la consideración de los proyectos de ley relativos a la jubilación de obreros y empleados ferroviarios y aclaración al artículo 8.º de la ley Mitre, así como también para escuchar la exposición iniciada por el señor diputado doctor Nicolás Repetto.

- 14.—Consideración del despacho de la comisión de legislación respecto de las modificaciones introducidas por el honorable senado en el proyecto de ley sobre jubilación de empleados y obreros ferroviarios. Sanción definitiva del proyecto.
- 15.—La honorable cámara resuelve pasar a cuarto intermedio.

—En Buenos Aires, a 24 de abril de 1919, siendo las 4 y 40 p. m., ocupan sus bancas en el recinto los señores diputados reunidos en quórum legal.

1

## ACTA

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Que- da abierta la sesión con 61 diputados en el recinto.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

**Sr. Jaramillo.** — Pido que se supri- ma su lectura y se dé por aprobada.

Asentimiento.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Ha- biendo asentimiento, se dará por apro- bada.

2

JUICIO POLITICO AL SEÑOR  
MINISTRO DE AGRICULTURA

**Sr. Repetto.** — Pido la palabra.

Señor presidente: yo debo hacer, y hago gustoso a esta honorable cámara, el honor de suponer que cada vez que ella vota una interpelación lo hace con el propósito sincero de que esa inter- pelación se realice. De acuerdo con esta convicción, yo debería reiterar el pe- dido de interpelación que he formulado para el señor ministro de agricultura, pidiendo a la cámara que fije nuevo día para que la interpelación se lleve a cabo. Pero algunos hechos ocurridos posteriormente al pedido de interpela- ción y las actitudes asumidas por el se- ñor ministro de agricultura, me obli- gan a desistir de mi propósito de for- mular una nueva interpelación y me estimulan a presentar a la honorable cámara, lisa y llanamente, un pedido

de juicio político para el señor minis- tro de agricultura, a fin de que sea des- tituido de su cargo por inepto y se le declare incapaz de ocupar ningún em- pleo de honor o de confianza a sueldo de la nación.

He llegado a esta conclusión después de haber meditado muy serenamente sobre las situaciones que crea el poder ejecutivo a este parlamento, y después de haber meditado también las pala- bras que pronunció el ministro de justi- cia, doctor Avellaneda, el año 1869.

La experiencia que yo tengo como diputado en materia de interpelacio- nes, me ha conducido a la conclusión de que el juicio político es mucho me- jor.

Decía el doctor Avellaneda:

“El derecho de acusación, franca- mente ejercido por la cámara de dipu- tados, es cien veces preferible a este sistema de ir con censuras y reprobacio- nes, socavando día por día y acto por acto la autoridad del presidente de la república”. Y agregaba el doctor Avellaneda: “Este sistema de las cen- suras que se preconiza en nombre de la benignidad, es no sólo cruel sino in- justo porque destruye moralmente y deprime, sin el valor de la acusación, sin el derecho de la defensa, sin las res- ponsabilidades de las sentencias y sin jueces, porque no son jueces los hom- bres políticos que vienen a este recinto a discutir sus ideas y sus pasiones”.

Como argentino me estremezco ante la situación de desorden, de ruina y de caos a que ha llegado nuestro país. Y me estremezco principalmente ante la serenidad y tranquilidad de este go- bierno, las que son tanto mayores cuan- to mayores son el peligro y su impo- tencia para resolver los graves proble- mas que ofrece actualmente nuestra si- tuación agraria.

Frente al conflicto agrario — cuyas razones justificadas todo el mundo ha reconocido, incluso la prensa que en los primeros momentos se mostró tan adversa — lo único que se le ha ocu- rrido al ministro de agricultura es rea- lizar unos cuantos viajecitos por las regiones agrícolas del país, viajecitos en los cuales — me duele decirlo — el señor ministro no ha demostrado sino

**Sr. Corvalán.** — No implica tratarlo sobre tablas, señor diputado.

**Sr. Rodríguez (A.).** — Pido la palabra.

Hago moción de preferencia para que el despacho de la comisión sobre aclaración de la ley llamada Mitre, se trate inmediatamente después que la cámara termine la consideración del asunto referente a la jubilación de los ferroviarios.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Se va a leer el artículo 101, que corresponde a la indicación que acaba de formular el señor diputado por Buenos Aires.

—Se repite la lectura del artículo 101 del reglamento.

**Sr. del Barco.** — Hay orden del día repartida.

**Sr. Rodríguez (A.).** — Hago moción de preferencia para tratar el asunto enseguida del de jubilación de ferroviarios.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Muy bien, pero antes está pendiente una moción de rectificación de la votación, formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Repetto.** — Pido la palabra.

Para explicar a la cámara y muy especialmente al señor diputado Demaría, por qué he votado en contra de que se trate sobre tablas el despacho de la comisión de obras públicas en el proyecto de interpretación del artículo 8.º de la ley Mitre.

Soy miembro de la comisión, he firmado en disidencia el despacho y estoy preparado para exponer las pocas razones que a mi juicio aconsejan la vuelta de ese asunto a comisión. Pero como en la cámara se ha hecho moción de que no se tratara esa cuestión, yo he votado por la afirmativa porque así se llegaba al mismo resultado que voy a sostener como conclusión del despacho que firmé en disidencia. Sin embargo, declaro francamente que al votar en esa forma no tenía ningún inconveniente en que la cámara tratara ese asunto, pues estoy preparado para fundar mi punto de vista.

**Sr. Demaría.** — Por eso lo que procede es rectificar la votación.

**Sr. Repetto.** — De manera que si se rectificara la votación, votaría en favor de la moción, sin que esto implicara ninguna contradicción.

**Sr. Presidente.** — Se va a rectificar la votación.

—Resulta afirmativa de 43 votos.

**Sr. Demaría.** — Ahora corresponde votar la otra moción: la inclusión en la sesión permanente de la interpelación del señor diputado Repetto.

**Sr. Gallegos Moyano.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Goyeneche).** — Permítame el señor diputado.

Se va a votar si inmediatamente que se termine la consideración de los dos despachos de la comisión de obras públicas, se autoriza al señor diputado a terminar de fundar su proyecto de resolución de enjuiciamiento político.

—Se vota, y dice el

**Sr. Prosecretario (Supeña).** — Resulta negativa de 41 votos.

**Sr. Dickmann.** — Se trata de una moción de orden que requiere la simple mayoría.

**Sr. Prosecretario (Supeña).** — Tiene razón el señor diputado. Ha sido un error de la secretaría. La votación ha resultado afirmativa.

## 14

### JUBILACION DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

A la honorable cámara de diputados:

Vuestra comisión de legislación ha estudiado las modificaciones introducidas por el honorable senado al proyecto de ley que le fué pasado en revisión, creando la caja nacional de jubilaciones y pensiones de empleados ferroviarios; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación, con excepción de las referentes al artículo 9.º, inciso 1.º y artículo 59.

Sala de la comisión, abril 16 de 1919.

Carlos F. Melo. — Nicolás A. Avellaneda. — Augusto Bunge. — Benjamín Bonifacio. — Carlos Gallegos Moyano. — Rafael Núñez. — Adrián C. Escobar.

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados,  
etcétera.*

CAPITULO I

Objeto y beneficiarios de la ley

Artículo 1.º — Créase la caja nacional de jubilaciones y pensiones de empleados ferroviarios con sujeción a las disposiciones que establece esta ley.

Art. 2.º — Quedan comprendidos en las disposiciones de esta ley:

- 1.º Los empleados u obreros permanentes de los ferrocarriles de jurisdicción nacional incluso los de los puertos que existen actualmente en el país o se incorporen al régimen de los mismos y de los que en adelante se establezcan, sea por la nación o por empresas particulares.

- 2.º Los miembros de los directorios locales radicados en el país.

- 3.º Los empleados u obreros a que se refiere el inciso 1.º de este artículo, que con posterioridad al 1.º de enero de 1913 hubiesen sido destituidos por causas que no sean las enumeradas en el artículo 33.

- 4.º Las personas a que se refiere el artículo 37 con relación a los empleados u obreros que hubiesen fallecido con posterioridad a la misma fecha, siempre que dichos empleados y obreros hubiesen tenido derecho a jubilarse, de acuerdo con las prescripciones de esta ley a la fecha de su fallecimiento.

Art. 3.º — Las disposiciones de esta ley no comprenden a los empleados y obreros que desempeñan funciones accidentales o de carácter transitorio.

Art. 1.º — Igual.

Art. 2.º — Quedan comprendidos en las disposiciones de esta ley:

- 1.º (Agregar al final de este inciso):

y los del cablecarril de Chilecito a la Mejicana. Aceptada.

Quedan también comprendidos en las disposiciones de esta ley los empleados de confitería, debiendo computárseles los servicios prestados bajo la dependencia de compañías arrendatarias de las empresas.

Aceptada.

- 2.º Suprimidos.

- 3.º (Ahora 2.º) Igual.

- 4.º (Ahora 3.º) Igual.

Art. 3.º (Agregar al final):

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

Se considera empleado permanente, a los efectos de la ley, a los empleados que tengan más de seis meses de servicios continuos en una empresa. Aceptada.

CAPITULO II

CAPITULO II

Administración de la Caja

Administración de la Caja

Art. 4.º — La administración de la caja estará a cargo de un directorio formado por el director general de ferrocarriles, tres representantes de las empresas ferroviarias y tres de los empleados y obreros de las mismas, bajo la presidencia del presidente de la caja de jubilaciones y pensiones civiles.

Art. 4.º — La administración de la caja estará a cargo de un directorio formado por un presidente designado por el poder ejecutivo con acuerdo del senado, tres representantes de las empresas ferroviarias y tres de los empleados u obreros de las mismas. Aceptada.

Art. 5.º — Los representantes de las empresas y de los obreros y empleados, serán los mismos que forman parte de la comisión permanente creada por el artículo 3.º de la ley número..., sobre reglamentación del trabajo ferroviario. Gozarán del estipendio que fije el directorio, por cada sesión que éste celebre.

Art. 5.º — Mientras no se sancione la ley reglamentaria del trabajo, la designación de los representantes de las empresas ferroviarias y de los empleados u obreros de las mismas que forman el directorio de la caja, se practicará en las condiciones que determine el decreto reglamentario de esta ley. Aceptada.

El presidente y directores gozarán del estipendio que les fije el presupuesto de la caja.

Art. 6.º — El presidente de la caja nacional de jubilaciones y pensiones civiles tendrá voz y voto en las deliberaciones del directorio, prevaleciendo su voto en caso de empate. Es el ejecutor de las resoluciones del directorio y su representante legal. Los empleados de la caja estarán bajo sus inmediatas órdenes, pero su nombramiento y remoción corresponderá al directorio.

Art. 6.º — Se suprimen las palabras subrayadas. Aceptada.

Art. 7.º — En ausencia del presidente de la caja nacional de jubilaciones y pensiones civiles, el directorio será presidido por el director general de ferrocarriles.

Art. 7.º — En ausencia del presidente de la caja de jubilaciones y pensiones de empleados ferroviarios, el directorio será presidido por el de la caja de jubilaciones y pensiones civiles. Aceptada.

Art. 8.º — El directorio se regirá por el reglamento interno que dicte al efecto, y anualmente fijará su presupuesto de gastos, que será satisfecho con los fondos de la caja. Dicho presupuesto no podrá exceder de tres por ciento de lo producido por las asignaciones de la caja, excepto los intereses de su fondo.

Art. 8.º — El directorio se regirá por el reglamento interno que dicte al efecto y anualmente fijará su presupuesto de gastos y el del monto de las jubilaciones y pensiones que debían ser satisfechos durante el año con los fondos de la caja, los que someterá a la aprobación del poder ejecutivo. Cuando los recursos calculados no alcanzasen a cubrir el importe total de las jubilaciones y pensiones que deberán ser satisfechas durante el año, la nación contribuirá con la diferencia. Aceptada.

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

CAPITULO III

Fondo de la caja

Art. 9.º — El fondo de la caja se formará con las asignaciones siguientes:

- 1.º Con los aportes que establece en sus artículos 4.º y 6.º la ley 9653 hasta la promulgación de la presente ley.
- 2.º Con el descuento forzoso del cinco por ciento de los sueldos de las personas comprendidas en el artículo 2.º, siempre que no excedan de mil pesos mensuales, en cuyo caso el descuento se hará solamente sobre esta última cantidad.
- 3.º Con el importe del primer mes de sueldo pagadero en veinticuatro mensualidades continuas, de la persona que por primera vez entre a formar parte del personal de las empresas ferroviarias o se reincorpore a ellas, siempre que no hubiese sufrido ese descuento por imperio de esta ley u otra que establezca una disposición análoga.
- 4.º Con la diferencia del primer mes de sueldo, cuando el empleado u obrero pase a ocupar un empleo mejor rentado o perciba un aumento de sueldo.
- 5.º Con una contribución mensual de las empresas igual al ocho por ciento de sobre los sueldos y jornales de todos sus empleados y obreros, siempre que no excedan de mil pesos mensuales, en cuyo caso la contribución se pagará solamente sobre esta última cantidad.
- 6.º Con el importe de las sumas pagadas de más y no reclamadas por el público dentro del término de un año, quedando prescripto los derechos de los cargadores al vencer ese término.
- 7.º Con las multas impuestas con arreglo a esta ley.
- 8.º Con las donaciones y legados hechos a la caja.
- 9.º Con los intereses de los fondos acumulados.

Art. 10. — Las empresas ferrovia-

CAPITULO III

Fondo de la caja

Art. 9.º — El fondo de la caja se formará con las obligaciones siguientes:

- 1.º Con los aportes del personal, Rechazada. recaudados de acuerdo con la ley número 9653, hasta la promulgación de la presente ley.
- 2.º Igual.
- 3.º Igual.
- 4.º Igual.
- 5.º Con la suma mensual que las empresas aportarán como única contribución, equivalente al 8 por ciento sobre los sueldos y jornales de todos sus empleados u obreros, siempre que no excedan de mil pesos mensuales, en cuyo caso la contribución se pagará solamente sobre esta última cantidad. Aceptada.
- 6.º Igual.
- 7.º Igual.
- 8.º Igual.
- 9.º Igual.

Art. 10. — Igual.

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

## Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

rias cuyo personal esté comprendido en los beneficios de esta ley, están obligadas a practicar los descuentos a que se refieren los incisos 2.º, 3.º y 4.º del artículo anterior, en los sueldos del personal de su dependencia y a depositarlos todos los meses conjuntamente con las contribuciones fijadas por los incisos 5.º y 6.º del mismo artículo, en dinero efectivo en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la caja, dentro de los diez primeros días siguientes a cada mes vencido sin deducir cantidad alguna por ningún concepto.

Art. 11. — Los fondos y las rentas que se obtengan de esta ley serán de exclusiva propiedad de las personas comprendidas en sus disposiciones, y con ello se atenderá al pago de las jubilaciones y pensiones que se acuerden en lo sucesivo de conformidad a la misma.

En ningún caso podrá disponerse de ellos para otros fines, bajo la responsabilidad personal de los miembros del directorio, que se hará efectiva judicialmente en sus bienes, "previa decisión del poder ejecutivo".

Art. 12. — Todos los fondos de la caja estarán depositados en cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, salvo las sumas que fije el directorio, como indispensable para los pagos corrientes.

Art. 13. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior los fondos de la caja, descontadas las sumas indispensables para los pagos corrientes serán invertidos, previa resolución del directorio, en cada caso, en la adquisición de títulos de renta nacional o que tengan la garantía subsidiaria de la nación, de manera que produzcan el mayor interés y la más frecuente capitalización.

Art. 14. — Los bienes que correspondan a esta ley son inembargables.

Art. 11. — Suprimir al final las Aceptadas palabras: "previa decisión del poder ejecutivo".

Art. 12. — Igual.

Art. 13. — Igual.

Art. 14. — Igual.

## CAPITULO IV

## De las jubilaciones

Art. 15. — Los empleados y obreros a que se refiere el artículo 2.º que hayan contribuido al fondo de la caja con los descuentos estableci-

## CAPITULO IV

## De las jubilaciones

Art. 15. — Igual.

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

dos en el artículo 9.º, salvo las excepciones que más adelante se determinan tendrán derecho a la jubilación que les acuerda esta ley.

Art. 16. — La jubilación que acuerda esta ley es:

- 1.º Ordinaria.
- 2.º Por invalidez.
- 3.º Por retiro voluntario.

Art. 17. — El monto de la jubilación ordinaria se calculará con relación al promedio de los sueldos percibidos durante los cinco últimos años de servicios y con sujeción a la siguiente escala:

- 1.º Hasta cien pesos de sueldo, será igual al noventa y cinco por ciento de sueldo.
- 2.º Desde ciento un pesos hasta trescientos pesos de sueldo, será igual a noventa y cinco pesos, más el sesenta y cinco por ciento de la diferencia entre el sueldo y cien.
- 3.º Desde trescientos uno hasta quinientos pesos de sueldo, será igual a doscientos cuarenta y cinco pesos más el cuarenta y cinco por ciento de la diferencia entre el sueldo y trescientos pesos.
- 4.º Desde quinientos un pesos hasta setecientos pesos de sueldo, será igual a trescientos treinta y cinco pesos, más el treinta por ciento de la diferencia entre el sueldo y quinientos pesos.
- 5.º Desde setecientos un pesos hasta mil pesos de sueldo, será igual a trescientos noventa y cinco pesos, más el veinte por ciento de la diferencia entre el sueldo y setecientos pesos.

Art. 18. — Corresponde la jubilación ordinaria, dentro de las condiciones establecidas en el artículo anterior:

- 1.º Integra: al empleado u obrero que habiendo prestado 32 años de servicios como minimum, tenga 55 años de edad.
- 2.º Reducida en un veinticinco por ciento: al empleado u obrero que habiendo prestado 32 años de servicios como minimum, tenga más de 50 y menos de 55 años de edad, y desea jubilarse.

Art. 19. — El monto de la jubila-

Art. 16. — Igual.

“Art. 17. — El monto de la jubilación ordinaria se calculará con relación al promedio de los sueldos percibidos durante los cinco últimos años de servicios y con sujeción a la siguiente escala:

- “1.º Hasta \$ 100 de sueldo, 95 por ciento.
- “2.º Sueldos entre 100 y 300 pesos: \$ 95 más el 80 % de la diferencia entre 101 y 300 pesos.
- “3.º Sueldos entre 300 y 1.000 pesos: \$ 255 más el 70 % de la diferencia entre 301 y 1.000 pesos.”

4.º Suprimido.

5.º Suprimido.

Art. 18. — Corresponde la jubilación ordinaria dentro de las condiciones establecidas en el artículo anterior.

- 1.º Integra: al empleado u obrero que habiendo prestado 30 años de servicios como mínimo tenga cincuenta años de edad.
- 2.º Reducida en un 25 %; al empleado u obrero que habiendo prestado treinta años de servicios como minimum, tenga más de cuarenta y cinco y menos de cincuenta años de edad y desee jubilarse.

Art. 19. — Igual.

Rechazada.  
(Véase la  
Nota al final)



Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

## Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

ción por invalidez se calculará con relación al promedio de los sueldos percibidos durante los últimos diez años de servicios y con sujeción a la escala de la jubilación ordinaria, a razón de un cinco por ciento en el monto de dicha jubilación, por cada año de servicios hasta su máximo.

Art. 20. — Corresponde la jubilación por invalidez, dentro de las condiciones establecidas en el artículo anterior:

1.º Al empleado u obrero que después de 10 años de servicios fuese declarado física o intelectualmente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su empleo o de otro compatible con su actividad habitual o su preparación comprobada.

2.º Al empleado u obrero que, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados, se incapacite en cualquier forma permanente en un acto del servicio y por causa evidente y exclusivamente imputable al mismo servicio.

Art. 21. — En ningún caso se podrá acordar jubilación por invalidez a quien la gestione después de haber dejado de formar parte del personal de las empresas ferroviarias.

Art. 22. — Corresponde la jubilación por retiro voluntario al empleado u obrero que, teniendo más de 10 años de servicios y 55 de edad, no alcance al número de años de servicios exigidos por el artículo 18.

Esta jubilación se calculará a razón de dos por ciento de la jubilación ordinaria por cada año de servicios.

Art. 23. — Los empleados u obreros que teniendo menos de 10 años de servicios alcancen los 55 años de edad y deseen retirarse, tendrán derecho a una indemnización igual al cinco por ciento de las sumas que hubiesen percibido en concepto de sueldos, más los intereses a razón del cinco por ciento anual, capitalizados por año. En ningún caso se calcularán estos intereses con posterioridad a la fecha del retiro.

Art. 24. — Los empleados u obreros que fuesen declarados cesantes por no requerirse sus servicios o por razones de economía, tendrán derecho a una indemnización igual a la

Art. 20. — Igual.

Art. 21. — Igual.

Art. 22. — Reducir a 50 años la Aceptada. edad de 55 que fija el artículo.

“Art. 23. — Los empleados u obreros que teniendo menos de 10 años de servicios alcancen los 50 años de edad y deseen retirarse, tendrán derecho a una indemnización igual a las sumas aportadas por ellos al fondo de la caja, más los intereses a razón del cinco por ciento anual, capitalizados por año. En ningún caso se calcularán estos intereses con posterioridad a la fecha del retiro.”

Art. 24. — (Agregar como tercer apartado). Aceptada.

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

fijada en el artículo anterior, sin intereses.

Cuando en este caso el empleado u obrero optase por renunciar a la indemnización y reingresar posteriormente al servicio ferroviario tendrán derecho, a los efectos de esta ley, a que se le computen los servicios prestados con anterioridad a la cesantía.

Los empleados u obreros comprendidos en la ley 9653, que hubieran sido declarados cesantes por no requerirse sus servicios o por razones de economía y retirados sus aportes de la caja con anterioridad a la sanción de la presente ley, podrán acogerse a los beneficios de la misma, siempre que cumplieren las condiciones para obtener la jubilación dentro del servicio ferroviario y previa restitución en una sola vez de las sumas que hubieran retirado anteriormente.

Art. 25. — Los derechos acordados por los dos artículos anteriores, quedan prescriptos para quienes no los hagan valer expresamente dentro del término de tres años a contar de la fecha de su retiro o separación del servicio.

Art. 25. — (Agregar como segundo apartado).

Los derechos acordados por el último apartado del artículo anterior se prescribirán a los dos años a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 26. — A los efectos de la jubilación sólo se tomarán en cuenta los servicios efectivos, aunque fuesen discontinuos durante el número de años requeridos.

Art. 26. — Igual.

Cuando la retribución del trabajo haya sido total o parcialmente por jornal, se computará un año de servicio por cada doscientos cincuenta días de servicio efectivo, y si hubiese sido por hora, se dividirá por 8 el número de horas para establecer el número de días de trabajo efectivo.

Art. 27. — La fracción que en el término total de antigüedad exceda de seis meses será computada por un año entero.

Art. 27. — Igual.

Art. 28. — Las jubilaciones por invalidez se acordarán con carácter provisorio y los beneficiarios quedarán sujetos a las revisiones, que en número de dos anuales, como máximo, disponga el directorio de la caja dentro de los cinco años posteriores a su otorgamiento, a partir de cuya fecha se considerarán definitivas.

Art. 28. — Igual.

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

Art. 29. — No se podrá acordar jubilación por invalidez sin previo informe del Departamento Nacional de Higiene o del médico o médicos de invalidez que acuerde el directorio respecto de las causales de imposibilidad física o intelectual alegadas. Sin perjuicio de esto, el directorio ordenará todas las averiguaciones que estime pertinentes.

Art. 29. — Igual.

Art. 30. — Unicamente los que hayan obtenido jubilación ordinaria podrán volver al servicio ferroviario. En este caso, el jubilado cesará en el goce de la jubilación y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo. Abandonado éste, volverá al goce de la jubilación sin que pueda interponer reclamo alguno para que le sea aumentada.

Art. 30. — (Agregar al final): Aceptada.

por cuya causa no se le exigirán los aportes establecidos en el art. 9.º, con relación al nuevo empleo.

Art. 31. — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior al jubilado por invalidez cuyos servicios fuesen utilizados en otro empleo; en este caso percibirá, además del sueldo, la fracción de la jubilación por invalidez que acuerde el directorio de la caja proporcionalmente a la disminución sufrida en su capacidad de trabajo. Si alcanzase los años de servicio para obtener jubilación ordinaria, le será acordada jubilación definitiva igual al monto de la ordinaria que corresponda al sueldo de su nuevo empleo, más la fracción de la jubilación por invalidez que haya percibido.

Art. 31. — Igual.

Art. 32. — Las jubilaciones serán acordadas por el directorio de la caja, ante el cual deberán solicitarse, y una vez concedidas serán pagadas desde el día en que el interesado deje el servicio.

Art. 32. — Igual.

En caso de disconformidad del interesado, la resolución del directorio será apelada ante el juez federal en turno, quien con las constancias del expediente administrativo u otros que, de oficio y para mejor proveer solicite de las autoridades de la caja, resolverá, sin ulterior recurso, sobre la correcta o incorrecta aplicación de la ley.

Art. 33. — No tendrán derecho a ser jubilados:

- 1.º Los que hubieren sido destituidos por mal desempeño de los deberes de sus cargos o por abuso de bebidas alcohó-

Art. 33. — Los empleados u obre- Aceptada.  
ros que no tuvieran familia que sostener, que hubieran llenado las condiciones exigidas para tener derecho a ser jubilados, y que antes de serlo fueran destituidos por mal desempe-

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

## Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

licas durante el ejercicio del mismo. Estas circunstancias deberán ser comprobadas en los expedientes que se promuevan en cada caso con sujeción a los reglamentos que el poder ejecutivo deberá dictar al efecto.

- 2.º El que hubiese sido condenado por sentencia judicial, por delito contra la propiedad o cualquier otro que haya merecido pena de presidio o penitenciaría.
- 3.º El que no solicitase su jubilación dentro de los cinco años siguientes al día en que dejó el servicio.

ño de los deberes de sus cargos o por abusos de bebidas alcohólicas durante el ejercicio del mismo, o condenados por sentencia judicial por delito que haya merecido pena de presidio o penitenciaría, no serán jubilados; pero se les devolverá el importe de los descuentos hechos a sus sueldos, siempre que no hubiera lugar a aplicarlo a la indemnización civil del daño causado.

En caso de tener familia que sostener, no se devolverá al penado el importe del descuento hecho a sus sueldos; pero gozarán de la pensión que corresponda a la jubilación perdida las personas que tengan derecho a ella, con arreglo a esta ley.

Las circunstancias de la cesación deberán ser comprobadas en los expedientes — ante el directorio de la caja — que se promuevan en cada caso con sujeción a los reglamentos que el poder ejecutivo deberá dictar al efecto.

Art. 34 (Nuevo) (Inciso 3.º del Art. 33 de diputados). — El derecho para pedir la jubilación se extingue a los cinco años a contar desde el día en que dejó el servicio.

Art. 34. — La jubilación es vitalicia y el derecho a percibirla sólo se pierde por las causas expresadas en el inciso 2.º del artículo anterior. En este caso gozarán de la pensión que corresponda a la jubilación anulada las personas que tengan derecho a ella con arreglo a esta ley. El jubilado perderá todo derecho a la jubilación si se domiciliase en el extranjero, sin recabar previamente permiso del congreso.

Art. 35. — La conmutación o el indulto no harán renacer los derechos perdidos con arreglo a lo dispuesto en los artículos 33 y 34.

Art. 36. — No podrá reclamar su jubilación el que tenga causa criminal pendiente sobre su persona, siempre que se proceda por alguno de los delitos expresados en el inciso 2.º del artículo 33.

Art. 35 (34 del proyecto de diputados). — “La jubilación es vitalicia y el derecho a percibirla sólo se pierde por las causas expresadas en esta ley. El jubilado perderá todo derecho a la jubilación si se domiciliase en el extranjero, sin recabar previamente permiso del congreso.”

Art. 36 (35 del proyecto de diputados). — La conmutación o el indulto no harán renacer los derechos perdidos, como consecuencia de lo dispuesto en esta ley.

Art. 37 (36 del proyecto de diputados). — No podrá reclamar su jubilación el que tenga causa criminal pendiente sobre su persona, cuando el hecho que motiva el proceso merezca pena de presidio o penitenciaría, o por delito contra la propiedad.

## CAPITULO V

## De las pensiones

Art. 37. — En los mismos casos en que con arreglo a esta ley haya derecho a gozar de jubilación y ocurra

## CAPITULO V

## De las pensiones

Art. 38 (37 del proyecto de diputados). — “En los mismos casos en

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

## Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

el fallecimiento del empleado u obreiro, tendrán derecho a pedir pensión en la proporción y condiciones establecidas en este capítulo: la viuda, los hijos o en su defecto los padres, y a falta de éstos, las hermanas solteras del causante.

Si el fallecido hubiese sido ya jubilado, las personas enumeradas en el párrafo anterior tendrán derecho a pensión en las condiciones establecidas en los artículos siguientes, sin más trámite que el de justificar su personería, acreditar la existencia de la jubilación de conformidad a esta ley y observar los requisitos por ellos establecidos.

Art. 38. — El derecho a gozar de la pensión entre las personas mencionadas en el artículo anterior corresponderá en el orden siguiente:

- 1.º A la viuda en concurrencia con los hijos.
- 2.º A los hijos solamente.
- 3.º A la viuda en concurrencia con los padres del causante siempre que éstos estuviesen exclusivamente a cargo de aquél.
- 4.º A los padres que se encuentren en las condiciones del inciso anterior.
- 5.º A las hermanas solteras del causante que se encuentren en las condiciones de los padres.

Los hijos naturales reconocidos o declarados tales por sentencia judicial gozarán de la parte de pensión a que tengan derecho con arreglo a la legislación civil.

Art. 39. — El importe de la pensión será equivalente al 50 por ciento del total de la jubilación que percibía o a que tenía derecho el causante.

La mitad de la pensión corresponde a la viuda, si concurren los hijos o los padres del causante; la otra mitad se distribuirá entre éstos "per cápita". A falta de padres e hijos, la totalidad de la pensión corresponderá a la viuda.

En los casos de los incisos 1.º y 2.º del artículo 38, si se extingue el

que con arreglo a esta ley haya derecho a gozar de jubilación y ocurra el fallecimiento del empleado u obreiro, tendrán derecho a pedir pensión en la proporción y condiciones establecidas en este capítulo: la viuda, el viudo inválido, los hijos o en su defecto los padres, y a falta de éstos las hermanas solteras del causante hasta la edad de 22 años y las mayores de edad que estuvieran imposibilitadas para el trabajo.

Si el fallecido hubiese sido ya jubilado, las personas enumeradas en el párrafo anterior tendrán derecho a pensión en las condiciones establecidas en los artículos siguientes, sin más trámite que el de justificar su personería, acreditar la existencia de la jubilación de conformidad a esta ley y observar los requisitos por ellos establecidos."

Art. 39 (38 del proyecto de diputada. Aceptada. dos). — El derecho a gozar de la pensión entre las personas mencionadas en el artículo anterior corresponderá desde el día del fallecimiento del causante y se otorgará en la forma y orden siguiente:

- 1.º A la viuda y al viudo incapacitado para el trabajo en concurrencia con los hijos.

(El resto del artículo igual).

Art. 40 (39 del proyecto de diputados). — Igual.

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

derecho a la pensión de alguna de las personas mencionadas en ellos, la parte correspondiente acrecerá a los hijos sobrevivientes comprendidos en los beneficios de esta ley.

Art. 40. — Si la esposa del empleado quedase viuda hallándose divorciada por su culpa o hubiese estado separada de hecho sin voluntad de unirse, no tendrá derecho a pensión, y ésta pasará a las personas que con arreglo a esta ley tengan derecho a ella.

Art. 41. — Si a la muerte del causante de una pensión quedaran hijos huérfanos de distintos matrimonios, la pensión se distribuirá en la proporción que corresponda a los mismos y será entregada a sus respectivos representantes legales.

Art. 42. — Las pensiones vitalicias y el derecho a percibir las sólo se pierde por las causas establecidas en el inciso 2.º del artículo 33 y en el artículo 46.

Art. 43. — No se acumularán dos o más pensiones o jubilaciones en la misma persona. Al interesado le corresponde optar por la que le convenga, y hecha la opción, quedará extinguido el derecho a las otras.

Art. 44. — Las pensiones serán acordadas por el directorio de la Caja ante el cual deberán solicitarse, acompañando los recaudos necesarios para justificar que el postulante está en las condiciones de esta ley. El directorio acordará o desechará en definitiva la solicitud, pero sus resoluciones podrán ser apeladas en la forma y a los efectos establecidos en el artículo 32.

Art. 45. — Las personas enumeradas en el artículo 37 tendrán derecho a una indemnización igual al 5 por ciento de las sumas percibidas en concepto de sueldos por el empleado u obrero fallecido que no deje derecho a pensión.

Art. 46. — El derecho de la pensión se extingue:

- 1.º Para la viuda, hermana o madre, cuando contrajere nuevas nupcias.
- 2.º Para los hijos, desde que llegasen a la edad de diez y ocho años.

Art. 41 (40 del proyecto de diputados). — Igual.

Art. 42 (41 del proyecto de diputados). — Igual.

Art. 43 (42 del proyecto de diputados). — Las pensiones vitalicias y el derecho de percibir las, sólo se pierde por las causas establecidas en esta ley sobre la pérdida de la jubilación. Aceptada.

Art. 44 (43 del proyecto de diputados). — Igual.

Art. 45 (44 del proyecto de diputados). — Igual.

Art. 46 (45 del proyecto de diputados). — Igual.

Art. 47 (46 del proyecto de diputados). — El derecho de la pensión se extingue: Aceptada.

- 1.º Para la viuda, viudo o madre, cuando contrajere nuevas nupcias.
- 2.º (Igual).

**Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados**

**Modificaciones del H. Senado**

**Despacho de  
la comisión**

- 3.º Para las hijas solteras desde que contraigan matrimonio.
- 4.º En general por vida deshonestá, vagancia o por domiciliarse en el extranjero sin permiso previo del congreso.

- 3.º Para las hijas o hermanas solteras, desde que contraigan matrimonio.
- 4.º (Igual).

**CAPITULO VI**

**CAPITULO VI**

**Disposiciones especiales**

**Disposiciones especiales**

Art. 47. — Los empleados y obreros con derecho a jubilación, pero que por haber prestado servicios con anterioridad a la fecha en que se ordenó el descuento forzoso, a que se refiere el inciso 1.º del artículo 9.º de esta ley o por cualquier otro motivo no hayan concurrido a la formación del fondo de la caja con el 5 por ciento de todos los sueldos percibidos durante el número de años acreditado para acogerse a sus beneficios, sufrirán un descuento del 10 por ciento en sus jubilaciones hasta reintegrar al fondo de la caja, una suma igual al 5 por ciento de los sueldos percibidos.

A este efecto, el directorio, al acordar las jubilaciones, formulará el cargo respectivo; en la misma forma se procederá con las pensiones.

Art. 48. — Los empleados y obreros que con anterioridad a la vigencia de esta ley y a partir del 1.º de enero de 1913 hubiesen sido destituidos por causas no previstas en esta ley, tendrán derecho a los beneficios que ella acuerda, con un 10 por ciento del descuento.

En las mismas condiciones podrán obtener pensión las personas a que se refiere el artículo 37.

Art. 49. — Los empleados nacionales que hayan prestado con anterioridad servicios en las empresas ferroviarias comprendidas en esta ley podrán acogerse a la jubilación que ella acuerda, siempre que justifiquen el minimum de servicios y la edad exigida.

En el cómputo de antigüedad se incluirán los servicios prestados en la administración nacional, sin bonificación de tiempo.

Art. 48. (47 del proyecto de diputados). — Igual.

Art. 49 (48 del proyecto de diputados). — El primer apartado igual. El segundo apartado modificado así:

En las mismas condiciones podrán obtener pensión las personas a que se refiere el art. 38, como también cuando los causantes hubiesen fallecido con posterioridad al 1.º de enero de 1913 y antes de la promulgación de esta ley.

Art. 50 (49 del proyecto de diputados). — La junta de la caja nacional de jubilaciones y pensiones civiles, creada por la ley número 4349, a los efectos de la jubilación de los empleados y obreros del estado, les computarán los servicios que hayan prestado en las empresas ferroviarias particulares a que se refiere la ley 9653.

A los actuales empleados y obreros ferroviarios, se les computarán también los servicios prestados con anterioridad en las distintas ramas de la administración nacional.

En uno y otro caso, el cómputo se hará sin bonificación de tiempo.

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

Art. 50. — En los casos del artículo anterior, la caja reclamará de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles las sumas que proporcionalmente correspondan.

Art. 51. — La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles transferirá los aportes de los empleados de los ferrocarriles del estado comprendidos en la presente ley a la caja que ésta crea, en las condiciones que convengan las respectivas administraciones o que resuelva el poder ejecutivo, sino hubiera al respecto un acuerdo expreso.

Art. 52. — Las jubilaciones y pensiones son inalienables. Será nula toda venta, cesión o constitución de derechos que se encierran sobre ellas y que impida su libre disposición por el titular de la misma.

Art. 53. — Las empresas ferroviarias estarán obligadas a suministrar al directorio de la caja todas las informaciones que sobre su personal soliciten y permitir las comprobaciones que juzgue pertinente, bajo los apercibimientos que procedan y pena de multa variable entre quinientos y dos mil pesos, según lo resuelva el directorio, y que se harán efectivas con arreglo al artículo 54 de esta ley.

Deberán asimismo antes del 1.º de octubre de cada año enviar al directorio el presupuesto de los sueldos, retribuciones y haberes del personal de su dependencia, que regiran durante el año siguiente.

Art. 54. — Las empresas ferroviarias que no depositaran en el tiempo y forma establecidos por el artículo 10 de esta ley las sumas a que están obligadas con sujeción a la misma, previa intimación del presidente del directorio de la caja, incurrirán en una multa de mil pesos por cada día de demora hasta tanto efectúe el depósito con el interés del 7 por ciento anual a contar desde el primer día de la mora.

El presidente del directorio tendrá personería suficiente para promover

Proyecto de la H. Cámara

Despacho de  
la comisión

Art. 51 (50 del proyecto de dipu. Aceptada. — (Agregar, después de las palabras "pensiones civiles", estas: "o reintegrar a la misma".

Art. 52 (51 del proyecto de dipu. Aceptada. — Los actuales empleados y obreros de la nación sujetos al régimen de la ley 4349 y a quienes la presente comprende en sus disposiciones, podrán optar, dentro del término de tres meses de su vigencia, por los beneficios de esta ley, o por los de la ley 4349. La caja nacional de jubilaciones y pensiones civiles, transferirá a la de los empleados ferroviarios, los aportes del personal que de acuerdo con el párrafo anterior optasen por acogerse a los beneficios de la presente, en las condiciones que convengan las respectivas administraciones o que resuelva el poder ejecutivo, si no hubiera al respecto un acuerdo expreso".

Art. 53 (52 del proyecto de dipu. Aceptada. — "Las jubilaciones y pensiones son inembargables e inalienables. Será nula toda venta, cesión o constitución de derechos que recaigan sobre ellas y que impida su libre disposición por el titular de la misma".

Art. 54 (53 del proyecto de dipu. Aceptada. — "Las empresas ferroviarias estarán obligadas a suministrar al directorio de la caja todas las informaciones que solicite sobre el personal y a permitir las comprobaciones que juzgue pertinente, bajo apercibimiento y pena de multa variable entre 500 y 2.000 pesos".

Art. 55 (54 del proyecto de dipu. — Igual.



Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

ante el poder ejecutivo o los tribunales de justicia, por vía de apremio, las acciones ejecutivas que correspondan hasta hacer efectivas las obligaciones y penalidades de esta ley.

Las resoluciones del directorio asentadas en el libro de actas y aprobadas, constituyen instrumento público.

Art. 55. — Podrán acogerse a los beneficios y obligaciones de la presente ley los empleados y obreros de las empresas ferroviarias de jurisdicción provincial cuyos representantes los solicitaren con intervención de los respectivos gobiernos locales, siempre que las empresas, los empleados y dichos gobiernos hagan los aportes y se sujeten a las condiciones fijadas en esta ley.

Art. 56. — El directorio de la caja reglamentará esta ley y someterá la reglamentación a la aprobación del poder ejecutivo.

Art. 57. — Los beneficios de esta ley se acordarán, a partir del 1.º de enero de 1918.

Art. 58. — Derógase la ley número 9653 y toda otra disposición en cuanto se oponga a las de esta ley.

Art. 59. — Las sumas que las empresas ferroviarias aporten a la caja que crea esta ley, así como todos los gastos que el cumplimiento de la misma les exija, serán considerados gastos de explotación a los efectos de la ley número 5315.

Art. 60. — Anualmente, al dictar la ley de presupuesto, el congreso podrá disponer se disminuya el monto de las jubilaciones y pensiones a

Art. 56 (55 del proyecto de diputados). — Igual.

Art. 57 (56 del proyecto de diputados). — Igual.

Art. 58 (57 del proyecto de diputados). — Los beneficios de esta ley se acordarán a partir de los tres meses de su promulgación.

Pasa a ser Art. 61 con otra redacción.

“Art. 59. — A los efectos de la contribución de las empresas, quedan éstas autorizadas para aumentar sus tarifas, en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponda, abriendo una cuenta especial cuyo movimiento deberán hacer conocer anualmente de la dirección general de ferrocarriles, la que será examinada y conformada por ésta a los efectos del artículo 53 de la presente ley.

Las empresas de ferrocarriles que no estén regidas por los artículos 8 y 9 de la ley número 5315, y que tengan un régimen diferente de tarifas que el establecido en dicha ley, podrán también aumentarlas hasta alcanzar los límites autorizados por la misma, quedando así sujetas a las disposiciones contenidas en los citados artículos.”

Art. 60. — La caja formulará un censo de los empleados comprendidos en la presente ley, y un estudio matemático sobre la base de la técnica

Proyecto de la H. Cámara  
de Diputados

Modificaciones del H. Senado

Despacho de  
la comisión

acordarse con arreglo a esta ley; en cuyo caso esta disminución se hará también efectiva sobre las ya acordadas.

En el mes de mayo de cada año el directorio de la caja deberá informar al congreso, por intermedio del poder ejecutivo, sobre el estado de la institución.

Art. 61. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Sala de la comisión, abril 16 de 1919.

*Carlos F. Melo. — Nicolás A. Avellaneda. — Augusto Bunge. — Benjamin Bonifacio. — Carlos Gallegos Moya. — Rafael Núñez. — Adrián C. Escobar.*

NOTA.—(Referente a los incisos 2.º y 3.º del Art. 17). — En la sanción por el honorable senado de los incisos 2.º y 3.º del artículo 17, existe un evidente error de redacción. En el inciso 2.º debe decir al final: "más el 80 por ciento de la diferencia entre cien y el sueldo"; y en el inciso 3.º debe decir: "más el 70 por ciento de la diferencia entre trescientos y el sueldo". Tal es el espíritu que informa al señor senador que propuso la reforma.

La comisión de legislación ha dejado la redacción errónea porque así han sido los incisos sancionados por el honorable senado y así comunicados por la presidencia de ese cuerpo a esta honorable cámara. Oportunamente el honorable senado podrá salvar el error.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — En consideración en general.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

La comisión de legislación, señor presidente, ha puesto todo su empeño en el estudio y despachó rápido del proyecto de ley de jubilaciones y pensiones a los ferroviarios, enviado por el honorable senado, después de una primera revisión. Ha habilitado días y horas para que este proyecto pudiera, dentro del período de sesiones extraordinarias del honorable congreso, obtener su sanción, y pasar al poder ejecutivo para ser cosancionado y promulgado.

Ha tomado sobre sí un grave peso, por cuanto no fué ella la que entendió en la preparación y redacción primiti-

actuaria dentro de los tres primeros años de su funcionamiento; cuyos resultados elevará al poder ejecutivo proponiendo las modificaciones que creyera conveniente.

Art. 61 (58 del proyecto de diputados). — Derógase toda disposición de otras leyes que se opongan a las de la presente.

Art. 62 (61 del proyecto de diputados). — Igual.

Aceptada.

va del proyecto, por cuanto también sus miembros después de muchos meses de otras fatigosas tareas han tenido que considerar, en unos cuantos días, el trabajo de revisión hecho por el honorable senado, trabajo inteligente y hábil, que en la superficie aparecía sencillo, pero que en el fondo era difícil y grave, y ha dado cima a esta tarea produciendo un despacho que cree que es el despacho justo.

— Ocupa la presidencia el señor vicepresidente 2.º de la honorable cámara, doctor Valentín Vergara.

Debo comenzar mi exposición desvaneciendo un juicio ligero que se ha formado respecto de la caducidad de este proyecto de ley, expresando que

en el concepto del que habla y de la comisión de legislación, este proyecto no caducará si no fuese sancionado como ley en el período extraordinario de sesiones.

No se trata de un proyecto sancionado en una sola cámara; se trata de un proyecto que ha obtenido sanción en las dos cámaras, pero con modificaciones introducidas por la cámara revisora. Este cuerpo podrá no aprobar las reformas que el honorable senado ha realizado en su sanción de cámara originaria, o podrá aprobarlas; pero, si no las aprobase, la sanción de la cámara de diputados iría en segunda revisión al honorable senado, que insistiría por dos tercios de votos, o no insistiría. Si no insistiese, se convertiría en ley la sanción de la cámara de diputados; si insistiese, la cámara de diputados tendría que insistir por dos tercios de votos para que su sanción quedara como definitiva; si tuviese los dos tercios de votos, convertiría su sanción primitiva en ley; si no tuviese los dos tercios de votos, quedaría convertida en ley la sanción del senado.

**Sr. Maidana.** — Una tramitación de dos meses más.

**Sr. Melo.** — Lo que estoy explicando, señor diputado, es que la ley Olmedo no alcanza a este proyecto. La ley Olmedo alcanza únicamente a aquellos proyectos que tuviesen tan sólo sanción de una cámara. Pero el que estamos discutiendo es un proyecto que tiene ya sanción de las dos cámaras, con modificaciones que concluirán en un breve trámite constitucional de aprobación o rechazo en la segunda revisión del senado o en la insistencia de la cámara.

**Sr. Maidana.** — Una tramitación de dos meses más, en caso de que la cámara de diputados no acepte las reformas hechas por el senado.

**Sr. Melo.** — Sí, señor diputado; pero no de dos meses.

Agregaré que forzosamente, aun cuando nosotros resolviéramos aprobar aquellas reformas, este proyecto tendría que volver al otro alto cuerpo, porque existen graves errores en algunas modificaciones hechas por el hono-

rable senado, que éste debe corregir, salvo que esta cámara, siguiendo un pensamiento que cree verdadero el diputado que habla, hiciera en esas modificaciones las reformas correspondientes. Pero de todas maneras, esas reformas tendrían que volver al senado, y nunca esta sanción sería la última.

Y para que la honorable cámara se convenza de que eso será así, presentaré algunos ejemplos. El honorable senado, en el artículo 2.º, inciso 4.º, ha dejado una referencia al artículo 37, que es hoy 36 del proyecto; ha dejado en el artículo 59 una referencia al artículo 53, que es el 52 del despacho del senado, y ha sancionado en el artículo 14, incisos 2.º y 3.º, jubilaciones que se refieren a los más altos sueldos de una escala, en vez de referirse al sueldo verdadero de los que deben gozar la jubilación. Así, dice el artículo 17: "El monto de la jubilación ordinaria se calculará con relación al promedio de los sueldos percibidos durante los cinco últimos años de servicios y con sujeción a la siguiente escala: 1.º, hasta 100 pesos de sueldo, 95 por ciento; 2.º, sueldos entre 100 y 300 pesos, 95 pesos más el 80 por ciento de la diferencia entre 101 y 300 pesos". Debe decir: entre 101 pesos y el sueldo. Inciso 3.º: sueldos entre 300 y 1.000 pesos: 255 pesos más el 70 por ciento de la diferencia entre 301 y 1.000 pesos". Debe decir: entre 301 y el sueldo.

De manera que aunque la cámara de diputados aprobase las reformas hechas por el senado, nunca conseguiría con esta sola sanción que el proyecto quedara convertido en ley, sino que tendría que enviarlo todavía al honorable senado.

**Sr. del Barco.** — Se trata de errores que pueden salvarse fácilmente con un cambio de notas entre la cámara de diputados y el senado.

**Sr. Melo.** — No, señor; porque una vez aprobado este proyecto, suponiendo que la cámara acepte las modificaciones del senado, debe pasar al poder ejecutivo para su promulgación, y entonces las alteraciones hechas en el texto de la sanción definitiva, por no-

tas, no podrían figurar como formando parte de la ley.

**Sr. Bunge.** — No son simples errores materiales, porque este es el proyecto que presentó el señor senador Torino, modificando la sanción de la cámara. No hay errores de imprenta.

**Sr. del Barco.** — Son simples errores que se corrigen por la secretaría de la cámara.

**Sr. Melo.** — Las leyes tienen una tramitación constitucional y reglamentaria, y esa tramitación es la que debe seguirse. No podemos hacer estas cosas oscuramente...

**Sr. del Barco.** — Yo no digo eso, señor diputado, sino que siempre han ocurrido estos errores, que se han salvado inmediatamente, de acuerdo con la mesa de la otra cámara.

**Sr. Melo.** — Estos errores no son sólo errores materiales, como la referencia a artículos equivocadamente hecha, sino errores de concepto.

Agregaré, señores diputados, que por otra parte las sesiones ordinarias constitucionalmente deben empezar el 1.º de mayo. La ceremonia oficial de apertura nada significa respecto del comienzo constitucional de las sesiones; de manera que va a haber continuidad entre estas sesiones extraordinarias y las ordinarias. Los empleados ferroviarios pueden estar tranquilos: el honorable congreso tiene el propósito de sancionar esta ley de previsión social, y la ha de sancionar. Por consiguiente, aun cuando encontremos, estos obstáculos, siempre después del 30 de abril, en las primeras sesiones de mayo, podría ser sancionado el proyecto por el honorable senado, o antes del 1.º de mayo si el senado se reuniese.

Quería desvanecer este argumento, que está circulando desde hace unos cuantos días para determinar en el espíritu de los señores diputados la aprobación de todas las reformas que el honorable senado ha hecho en el despacho de esta cámara. La honorable cámara resolverá como lo crea conveniente respecto de esas modificaciones, pero es bueno que aclaremos esta situación para que los señores diputados

sepan que el asunto de cualquier manera tiene que volver al senado.

He querido también que los obreros y los empleados de los ferrocarriles y de los puertos a quienes alcanzará la ley, estuviesen completamente tranquilos, en la seguridad de que, de todos modos, este proyecto no caducará y podrá ser tratado en las primeras y ya inmediatas sesiones ordinarias.

Los señores diputados saben cuáles son los antecedentes de esta ley orgánica de jubilaciones y pensiones de empleados ferroviarios. El antecedente inmediato es la ley 9653. Por esa ley básica, el fondo de la caja de jubilaciones y pensiones debía formarse con la contribución de los empleados, un tres por ciento de sus sueldos fijos, la mitad de su primer sueldo mensual y el importe por una vez de todo aumento ulterior; con la de las empresas, cuya forma sería convenida con el poder ejecutivo pero en cantidad que no podría ser inferior al tres por ciento del sueldo fijo de los empleados y obreros para las empresas que tuviesen un beneficio de cuatro por ciento o mayor; y con la contribución del público por medio de un aumento especial sobre los fletes de cargas y encomiendas que no excedería del tres por ciento y lo cobrado de más y no reclamado.

Los señores diputados saben las vicisitudes de esta ley 9653: cómo las empresas descontaron a sus obreros, de sus sueldos, los aportes que debían hacer por la ley, les descontaron sobre ellos todavía una comisión de cobranza, y no depositaron la parte con que les correspondía concurrir a ellos. Igualmente saben cómo resistieron la ley y la protestaron, y cómo estas protestas asumieron proporciones extremas, desconociendo el derecho del estado argentino para establecer esta contribución de previsión social, porque sostenían que sus leyes de concesión eran leyes-contratos hechas por el estado como jurídicamente igual a las empresas, y que en virtud de esas leyes y de la ley Mitre 5315, el estado se había desprendido de todo derecho para exigirles la contribución a la caja

de seguros. Entretanto, como si fueran a hacer su aporte, aumentaron en un diez por ciento sus tarifas, y los señores diputados han podido oír, en la interpelación que tuve oportunidad de formular con el señor diputado Molina en 1916 al señor ministro de obras públicas, que lo era entonces el doctor Manuel Moyano, la relación de los hechos derivados de la resistencia de las empresas a cumplir la ley; y han podido oír cómo quedó demostrado el aumento real de las tarifas, la resistencia de las empresas a cumplir la ley básica, el censo de empleados necesario para fundar sobre él una ley sería de jubilaciones y pensiones, en los aportes, etcétera, etcétera y en las protestas airadas, y quedó establecido que habían cobrado a los empleados una comisión del tres al cinco por ciento sobre los aportes que éstos debían hacer por la ley. Diré que esa situación se ha prolongado hasta hoy. Existen pleitos entre el estado y las empresas, derivados de la falta de cumplimiento por éstos de la ley 9653.

En estas condiciones se sancionó la ley orgánica de jubilaciones y pensiones de los empleados ferroviarios, consecuencia de aquella ley básica.

Cuando la comisión especial de legislación ferroviaria que había designado la honorable cámara para proyectar esta ley orgánica de jubilaciones y pensiones a la que fueron todos los antecedentes expuestos en la citada interpelación trajo su despacho definitivo a este cuerpo, la honorable cámara introdujo en ese despacho el inciso 1.º del artículo 9, estableciendo que el fondo de la caja se formará: primero, con los aportes que establecen los artículos 4 y 6 de la ley 9653, recaudados hasta la promulgación de esta ley orgánica.

Fué el diputado que habla quien, en vista de que esos aportes, que correspondían por la ley básica, no figuraban en el fondo de la caja creada por la ley orgánica, preguntó al señor miembro informante si la omisión de ellos había sido deliberada: éste le respondió que nó y que había pensado, con el señor diputado por San Juan doctor

Barrera, en proponer, para comprenderlos, un inciso que faltaba, y entonces el mismo diputado que ahora habla lo propuso y fué agregado por sanción de toda la cámara.

La comisión de legislación del honorable senado modificó al revisar esta ley ese inciso 1.º del artículo 9, reemplazándolo por el siguiente: El fondo de la caja se formará: 1.º, con los aportes del personal, recaudados de acuerdo con la ley número 9653, hasta la promulgación de la presente, y el honorable senado lo ha sancionado así.

De manera que por la sanción del honorable senado las empresas ferroviarias ganan los pleitos que tienen pendientes con el estado y queda consagrada la resistencia que hicieron a la ley 9653, desconociendo derechos fundamentales del estado argentino.

Respeto mucho el criterio de los hombres que estudian, y como diputado no puedo menos de respetar también como cuerpo al honorable senado y a los señores senadores, que por otra parte han mostrado al tratar este proyecto habilidad y elocuencia. Pero debo notar que con su sanción el honorable senado se ha interpuesto, y si la honorable cámara de diputados la aceptara el congreso de la nación se interpondría, sentenciando el pleito entre el estado y las empresas a favor de éstas.

De modo que las empresas ferroviarias de jurisdicción nacional recogieron la contribución de los obreros en virtud de la ley básica, les descontaron sin derecho una comisión, recogieron lo cobrado de más por el público y nada aportaron por su parte a la caja de previsión que creaba la ley básica; se burlaron así de ésta, la protestaron repetidas veces, y ahora el honorable senado consagra en su despacho del inciso 1.º del artículo 9 esas protestas y esa burla.

La comisión de legislación de la cámara de diputados ha creído que eso no podía aceptarse, que el estado argentino no puede de ninguna manera consentir que empresas, por más respetables que sean, por mucho que hayan contribuido a la prosperidad del país,

se alcen contra sus leyes y consigan que el propio congreso las anule a los pocos años de haberlas dictado, aceptando así en el fondo el derecho de aquéllas a desconocerlas y a violarlas.

Por eso ha mantenido en su despacho el inciso tal como fué votado por este cuerpo.

El mismo artículo 9.º de la ley básica, sancionado por la cámara de diputados, establecía en su inciso 5.º que la caja de jubilaciones se formaría también con el aporte de una contribución mensual de las empresas igual al ocho por ciento de los sueldos y jornales de todos los empleados y obreros, siempre que no excediera de mil pesos mensuales, en cuyo caso la contribución se pagaría únicamente sobre esta cantidad. La comisión de legislación del senado modificó este inciso, estableciendo que la contribución consistiría en la suma mensual "que las empresas han convenido en aportar" como única contribución, "equivalente al ocho por ciento sobre los sueldos y jornales de todos sus empleados y obreros, siempre que no exceda de mil pesos mensuales, en cuyo caso la contribución se pagaría únicamente sobre esta cantidad.

El senado modificó el despacho de su comisión de legislación, quitando la expresión "han convenido en aportar" y reemplazándola por "aportarán como única contribución". La comisión de legislación de la cámara de diputados, teniendo presente la substitución hecha en el seno del honorable senado, que significa que en lugar de un convenio hecho por las empresas con el honorable senado la ley establece el aporte y que las empresas deben cumplirlo, no ha tenido inconveniente en aceptar esa sanción, porque piensa que en el estado actual de la vida de las empresas es justo establecer que esa contribución de ocho por ciento sea la única contribución, sola modificación hecha en el senado al inciso 5.º del artículo 9.º, y que quedaría aprobada.

El artículo 59, sancionado por esta honorable cámara, establece que las sumas que las empresas ferroviarias aportan a la caja que crea esta ley, así como todos los gastos que el cumpli-

miento de la misma ley les exija, serán considerados gastos de explotación a los efectos de la ley 5315, que es la llamada ley Mitre.

La comisión de legislación del senado había sustituido ese artículo por otro que decía que, a los efectos de la contribución que esta ley fija a las empresas en el inciso 4.º, artículo 9.º, quedan éstas autorizadas para aumentar sus tarifas sin sujeción a los requisitos que imponen las leyes números 2873 y 5315, y con prescindencia de sus demás disposiciones, en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponda. A ese efecto quedan obligadas a llevar una cuenta especial, cuyo movimiento deberá hacer conocer anualmente de la dirección general de ferrocarriles, la que será examinada y confirmada por ésta, a los efectos del artículo 53 de la presente ley.

Las empresas de ferrocarriles que no estén regidas por los artículos 8.º y 9.º de la ley 5315, y que tengan un régimen diferente de tarifas que el establecido en dicha ley, podrán también aumentarlas hasta alcanzar los límites autorizados por la misma, quedando así sujetas a las disposiciones contenidas en los citados artículos.

El honorable senado sancionó, en substitución, el siguiente artículo:

"Artículo 59. — A los efectos de la contribución de las empresas, quedan éstas autorizadas para aumentar sus tarifas en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponda, abriendo una cuenta especial cuyo movimiento deberán hacer conocer anualmente de la dirección general de ferrocarriles, la que será examinada y conformada por ésta a los efectos del artículo 53 de la presente ley. (Debe ser 52).

"Las empresas ferrocarrileras, etcétera, etcétera." Lo demás está igual.

La comisión de legislación os aconseja que insistáis en el artículo 59 sancionado por esta cámara.

Es cierto que la honorable cámara de senadores ha suprimido en el despacho de su comisión de legislación la referencia que se hacía a la ley general de ferrocarriles y a la ley Mitre; es

cierto que ya las empresas no aparecen expresamente fuera de la sujeción a los requisitos que imponen las leyes 2873 y 5315, y noten los señores diputados que la ley 2873 establece que las tarifas serán uniformes, sobre todo serán justas y razonables, y esto es de la esencia de una ley de ferrocarriles. El despacho de la comisión de legislación del honorable senado eximía a las empresas de toda sujeción a las reglas, a las normas obligatorias establecidas en la ley 2873. La sanción del senado suprime esa expresión, pero deja la autorización para que las empresas aumenten sus tarifas hasta el monto de la contribución que aportan al fondo de la caja; es decir, señores diputados, que la sanción que nos viene del honorable senado contiene el siguiente mecanismo: primero, las empresas quedan eximidas completamente de la contribución de la ley básica ganando con esto más de veinte millones de pesos; segundo, las empresas aparecen aportando el 8 por ciento como contribución al fondo de la caja, pero ellas no lo pagan de sus beneficios, pues se las autoriza para hacer incidir ese 8 por ciento sobre sus tarifas, sin control de la dirección de ferrocarriles sobre la aplicación del aumento a tal o cual renglón, a tales o cuales productos, con lo que quedaría violada la ley 2873, pues las tarifas podrán no ser justas ni razonables con tal que el aumento sea solo en proporción del aporte a la caja y de que se haga conocer anualmente el movimiento de la cuenta respectiva, que será examinada y conformada por la dirección de ferrocarriles sólo a los efectos del artículo 53 de esta ley.

En los Estados Unidos, en donde hubo antes la más amplia libertad respecto a las explotaciones ferroviarias, donde se pensaba que esa libertad era benéfica y donde se sufrió mucho por ese exceso de libertad, en cuyo territorio los estados y el estado general han tenido que intervenir nombrando comisiones para que hicieran respetar la justicia y la razonabilidad de las tarifas, la libertad absoluta ha traído como consecuencia la necesidad de un control severo, porque las tarifas pue-

den servir para aniquilar como para exaltar la industria de una región, para hacer derivar el comercio de un punto a otro, para favorecer intereses particulares en perjuicio de los intereses de un estado, de una provincia o de la nación, se trata del más delicado quizá—con el de correos y telégrafos—de los servicios públicos y la intervención del estado en las tarifas es de todo punto indispensable.

Por eso la comisión de legislación ha considerado esencial dejar en pie la sanción de la cámara de diputados, que establece simplemente que las sumas que aportarán a la caja las empresas serán consideradas gastos de explotación a los efectos de la ley número 5315. Así las empresas pueden aumentar sus tarifas con autorización del estado una vez que pasen el 6,80. límite que les ha fijado el artículo 3.º del decreto reglamentario de la ley Mitre, para el aumento espontáneo; pero en uno y otro caso sometidas siempre a las disposiciones de la ley 2873 y a la 5315.

La única empresa que aparece con un 4,58 de beneficio, con relación al capital invertido, es, en el ejercicio 1917-18, el ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico.

Las demás empresas aparecen con beneficios menores. Y como según los informes que el señor ministro ha tenido la deferencia de darnos, el 8 por ciento de contribución de las empresas a la caja no representa sino 2,4 por ciento de los beneficios en relación con el capital invertido, resulta que las empresas pueden aumentar espontáneamente, dentro de la disposición sancionada por la cámara de diputados, en ese 2,4 por ciento sus tarifas, y no pasarán por ahora al 6,80. Pero cuando haya llegado ese beneficio al límite tendrán que acudir al estado para que les autorice el aumento de sus tarifas; y entonces y ahora quedarán siempre, como lo he dicho, sometidas a lo prescripto en la ley 2873.

Diré de paso, señor presidente y señores diputados, que es necesaria una revisión general de las tarifas ferroviarias. No puedo decir que he hecho un estudio completo de ellas, pues no

soy un especialista, pero las he visto cuidadosamente con relación a la producción del país, a sus necesidades, y francamente creo que el estado debe de reverlas porque hay en ellas un criterio que no es el que debiera tener el estado argentino si fuese el dueño de los ferrocarriles.

La honorable cámara de diputados había omitido la contribución del estado. En mi concepto eso fué un error tratándose de un servicio público como este, vinculado a la existencia misma de la sociedad y a su desarrollo como propulsor indispensable del bienestar general. Este servicio debe estar, en principio, a cargo del estado.

Los Estados Unidos, como he dicho, antes, han seguido primero el sistema inglés de libertad de concesión a las empresas, se han visto obligados, durante la guerra, desde el 26 de diciembre de 1917, a tomar por medio del gobierno federal la dirección de las empresas, explotándolas por medio del personal de las compañías. No quiero hablar de los países europeos que estaban más directamente comprometidos en la guerra; los señores diputados saben que ha sido necesario para esos países tener en sus manos estos medios de transporte, esenciales para organizar las industrias de la guerra y la circulación y distribución de provisiones necesarias en todo su territorio.

Estos servicios tienden y tenderán cada día más a ir a manos del estado. Son servicios públicos de que el estado es responsable. Uno de los fines esenciales del estado es el desarrollo de la prosperidad pública, el desarrollo del bienestar general; y éste es también uno de los fines que se propusieron los constituyentes de 1853 al darnos organización política.

El ferrocarril es un instrumento de bienestar general; pero no es solamente eso: es un instrumento de unidad nacional, es un instrumento de defensa nacional. La comunicación rápida por el ferrocarril entre las distintas partes del territorio argentino, tan extenso, ha traído poco a poco en esta red que asume objetivamente la forma de un abanico que parte de la capital de la república hacia todas las pro-

vincias y territorios, ha traído, decía, como consecuencia la vinculación de la capital de la república con las provincias argentinas, y ha trabajado por la unidad nacional mucho más que las palabras de nuestros tratadistas de derecho constitucional y que todos los discursos parlamentarios.

La unidad nacional, la prosperidad pública, la defensa común. Los ferrocarriles no son solamente un órgano económico y moral sino también un órgano estratégico. En esta última gran guerra se ha visto cuánto han valido los ferrocarriles, no solamente económicos, sino estratégicos. Los señores diputados lo saben y no quiero molestar su atención con referencias a hechos conocidos.

Defensa nacional, unidad nacional, economía nacional. He aquí, señores, tres objetos fundamentales para el estado argentino, cuyo instrumento indispensable son los ferrocarriles. Los ferrocarriles, en conclusión, o deben estar en manos del estado, o deben ser estrictamente controlados. Y bien: el estado no puede, entonces desinteresarse cuando se constituye una caja de jubilaciones para los empleados y obreros de los ferrocarriles, dejando que el fondo de esa caja se forme únicamente con el aporte de los empleados y obreros de las empresas, o del público. El estado argentino está obligado, no solamente del punto de vista moral, sino del jurídico, por los propios fines que la constitución le ha asignado, a concurrir a formar el fondo de la caja.

La cámara de diputados omitió eso; el senado lo ha establecido en una forma que si fuera definitiva sería poco satisfactoria. Así, dice el artículo 8.º en su parte final: "Cuando los recursos calculados no alcanzasen a cubrir el importe total de las jubilaciones y pensiones que deberán ser satisfechas durante el año, la nación contribuirá con la diferencia". De modo que el estado federal argentino garantiza los déficits de la caja que por esta ley se constituye.

Los señores diputados comprenden cuán peligroso sería que el estado argentino garantizara de una manera indeterminada, si esta ley fuese defini-



tiva, los depósitos de la caja; y lo comprenderán más cuando vean en qué forma ha sido organizada la caja por la sanción del senado. De paso tan sólo haré notar que en 1935, según esa sanción del senado, el estado debería pagar alrededor de nueve millones, y en 1944, por lo menos veinte.

El señor diputado Bunge explicará a la honorable cámara con mayores detalles este aspecto de la cuestión; no cabe en un informe general como éste una explicación como la que el señor diputado, con toda competencia, pueda dar a la cámara.

**Sr. Bunge.** — Pero sin detalles; lo advierto para tranquilizar a los señores diputados.

**Sr. Melo.** — La comisión de legislación se había planteado esta cuestión previa: ¿Puede la cámara de diputados aceptar algunas de las modificaciones del senado y rechazar otras? La comisión decidió que sí. Se planteó después esta segunda cuestión: ¿puede la cámara aceptar parte de una de las modificaciones del senado a un artículo o inciso y rechazar otra parte? La comisión resolvió que no.

La primera de las resoluciones está apoyada en precedentes parlamentarios ingleses, norteamericanos y argentinos, y no es menester fundarla. La segunda no tiene el apoyo de precedentes parlamentarios extranjeros. En mi concepto, personalmente, creo que mientras no se haya llegado a la persistencia, sea en las modificaciones del senado, sea en el despacho de la cámara de diputados, se pueden producir modificaciones.

Voy a explicar esto en dos palabras, y pido desde ya disculpa a la honorable cámara si me detengo un poco en este punto.

Supongamos que la cámara de diputados sanciona por mayoría un proyecto de ley. La cámara de senadores lo sanciona también por mayoría en primera revisión y pasa al poder ejecutivo. No lo sanciona sino que hace en él modificaciones por mayoría, volviendo a la cámara de diputados. La cámara de diputados acepta o rechaza las modificaciones por mayoría, pero, cuando vuelve en segunda revisión al sena-

do, el senado, para insistir, necesita dos tercios de votos. Esta insistencia definitiva, porque es definitiva ya en el senado, es una persistencia.

Los tratadistas ingleses distinguen la insistencia de la persistencia. La persistencia es la última insistencia. Y bien: por nuestra constitución, esa insistencia última se hace por dos tercios de votos, sea en el senado para la revisión, o sea en la cámara de diputados para su primitiva sanción cuando es ésta iniciadora. Cuando se llega a ese punto, ya no se pueden hacer modificaciones, pero cuando no se ha llegado a la persistencia todavía, sino que se está en la sanción por mayoría, en concepto del diputado que habla, entonces sí se pueden hacer modificaciones. El artículo 71 de la constitución es un instrumento para hacer buenas leyes, y como no prohíbe modificar las modificaciones, debe aplicarse inteligentemente para mejorar la ley.

La comisión de legislación no ha aceptado—porque no hay precedentes argentinos—este criterio; y, por lo tanto, se ha encontrado ante esta situación: o eliminaba la contribución indeterminada del estado argentino rechazando la sanción y volviendo al despacho primitivo de la cámara de diputados, o aceptaba la modificación del senado.

Teniendo en cuenta las razones que he dado con anterioridad respecto de la función pública que los ferrocarriles desempeñan, resolvió la comisión aceptar la modificación hecha por el honorable senado, pero con el siguiente criterio:

El artículo 60 del despacho del honorable senado prescribe que la caja formulará un censo de los empleados comprendidos en la presente ley y un estudio matemático sobre la base de la técnica actuarial, dentro de los tres primeros años de su funcionamiento, cuyos resultados elevará al poder ejecutivo, proponiendo las modificaciones que creyera conveniente.

Teniendo en cuenta, pues, que esta ley es provisoria—provisoria es, señores diputados, porque se ha hecho sin un censo exacto de los empleados ferroviarios, sin una estadística de mor-

bilidad y de mortalidad; sin una clasificación de los empleados según sus servicios; provisoria es, por su naturaleza, por su estructura y por el artículo 60, que establece que se modificará dentro de tres años, según estadísticas científicas, según cálculos matemáticos—la comisión de legislación de la honorable cámara pensó que debía aceptar que esta garantía del estado, que significa la contribución y la intervención de éste en una caja de previsión para empleados en un servicio público, se mantuviera en la forma en que el honorable senado la establecía, ya que consideraba que la honorable cámara no podía modificar la modificación hecha por el senado.

Para tranquilidad de la honorable cámara, diré que, dentro de los tres años el estado no tendrá que concurrir al fondo de la caja, ni dentro de algunos años más.

De manera que la comisión de legislación os aconseja que aceptéis esta modificación con carácter de provisoria, hasta que, hecho el estudio científico sobre la base de una estadística seria, se pueda dictar la ley definitiva y establecer la contribución determinada del estado, todo en tanto que el estado llega a hacerse cargo del servicio público por ferrocarril, lo que espero que sucederá cuando llegue el país a un grado alto de cultura y sea posible crear las organizaciones de derecho público que deben administrar con autonomía económica, financiera y de personal estas grandes empresas sociales, instituciones o cuerpos de derecho público a los que ya me he referido en otra exposición que hice ante la honorable cámara.

La cámara de diputados había sancionado un proyecto de ley con una base determinada de edad y de número de años de servicio. La comisión de legislación del honorable senado modificó la sanción de esta honorable cámara, y el senado modificó a su vez el despacho de su comisión de legislación.

Debo recordar que la honorable cámara de diputados no hizo una clasificación de los empleados según la na-

turalidad de los servicios que prestan, que no tenía tampoco un censo de los empleados ferroviarios y que la comisión de legislación del honorable senado no hizo sino disminuir la edad y los años de servicios fijados por esta honorable cámara y agregar a la caja la concurrencia del estado. El honorable senado modificó a su vez el despacho de su comisión, disminuyendo la edad establecida por ésta. Así, la cámara de diputados estableció 55 años de edad y 32 de servicios para la jubilación íntegra; la comisión de legislación del senado redujo la edad a 53 años y los servicios a 30; y el senado a su vez, redujo la edad a 50 años. Para la jubilación, reducida en un 25 por ciento, la cámara estableció 32 años de servicios y más de 50 y menos de 55 años de edad; la comisión de legislación del senado, dejando los años de servicios, redujo la edad a un mínimo de 48 y un máximo de 53; y el senado rebajó el mínimo a 45 y el máximo a 50. La cámara de diputados había concedido la jubilación por retiro voluntario a los que tuviesen más de 10 y menos de 30 años de servicios, con 55 años de edad; la comisión de legislación del senado redujo los años de edad a 53, y el senado a 50.

Por la sanción de la cámara de diputados se había concedido una indemnización de retiro voluntario a los empleados u obreros que tuviesen 55 años de edad con menos de 10 de servicios; la comisión de legislación del senado rebajó la edad que da ese derecho a los 53 años y el senado a 50.

La comisión de legislación de esta honorable cámara ha aceptado las sanciones del senado únicamente en virtud de que se trata de una ley provisoria y por no demorar la sanción definitiva; pero cree que las modificaciones introducidas son perjudiciales para la estabilidad de la caja. Un cuadro sencillo, que pido que se incorpore al Diario de Sesiones (1) y que contiene un estudio hecho por disposición del señor ministro de obras públicas respecto de las consecuencias de la sanción del senado, de las que hubiera

(1) Insértase al final.

traído la sanción del despacho de la comisión de legislación de aquel cuerpo y de las que importaría la de la honorable cámara de diputados, demuestra a primera vista la diferencia que hay respecto de la estabilidad de la caja.

No quiero citar cifras, porque sé que el señor diputado Bunge, que es diestro en ellas, lo hará ante la honorable cámara, y espero que su demostración ha de ser concluyente.

**Sr. Bunge.** — Parece que el señor diputado se hubiera propuesto asustar a la cámara con la perspectiva de un aburridísimo desfile de kilómetros y de números.

**Sr. Melo.** — No, señor diputado, al contrario; ha de ser muy interesante.

En favor del despacho del senado, podría argüirse quizá en general, en cuanto a las modificaciones que la comisión de legislación os aconseja no aceptar el estado actual de las empresas.

Las empresas de ferrocarriles han sufrido sin duda con la crisis, y particularmente con la repercusión de la guerra; sus beneficios han disminuído. Este estado que tengo a la vista y que el señor ministro de obras públicas ha tenido la amabilidad de hacerme preparar, a mi pedido, muestra el decrecimiento de los beneficios sobre el capital invertido, desde 1912 a 1918, salvo para el Pacífico, que ha tenido un crecimiento en los ejercicios de 1917 y 1918 debido a causas accidentales.

Ese estado de las empresas es lo que ha decidido en el seno de la comisión el voto de alguno de sus ilustrados miembros en favor del despacho del senado en cuanto a la eliminación del concurso que debían las empresas en virtud de la ley básica. Pero es que en realidad este es un estado de cosas transitorio que va a pasar ya. Todos vemos que los Estados Unidos están disponiéndose a inclinar la mejor parte de su acción hacia el continente americano; todos sabemos que ha construído gran número de barcos, que se preocupa de establecer comunicaciones con nosotros, de acrecentar la acción de

sus capitales, de dar en estos países salidas a sus productos, de encontrar buenos mercados para sus industrias. Tendremos carbón, tendremos material fijo y rodante para las empresas y tendremos una ola de prosperidad que vendrá, señor presidente, de la acción de aquel pueblo y que se ha de difundir por todo el continente. En esas condiciones las empresas de ferrocarriles de la república han de mejorar su situación aumentando sus beneficios; y esto ha de tener lugar seguramente antes de un año.

De manera que la comisión de legislación de la honorable cámara no podía detenerse en la consideración de un estado financiero que es transitorio, para cerrar los ojos ante una situación de desconocimiento de las leyes del estado y de su derecho para regular la acción de las empresas de transportes.

Por otra parte, señor presidente, las empresas de ferrocarriles se manejan, con gran habilidad. Note la honorable cámara cómo aparecen contribuyendo con una generosidad, con un tres por ciento más que sus empleados y obreros; esa contribución generosa del 8 por ciento parece suplir la ausencia del cumplimiento de la ley básica y de los veintitantos millones que habían omitido aportar al tesoro de la caja. Pero note también la honorable cámara el ingenio con que las empresas han hecho derivar en seguida su contribución para que incida sobre las tarifas y las exima del control de éstas por parte del estado. En realidad las empresas no contribuyen en el despacho del senado, porque si, según él, el aporte incide sobre las tarifas y éstas pueden ser aumentadas en la proporción de la contribución sin el control del estado sobre la materia del aumento, por autorización inmediata de la ley porque el único control va a ser el de los estados demostrativos que manden, resultará que este aporte generoso del ocho por ciento desaparece completamente. Queda en pie el desconocimiento por las empresas de la ley 9653 y de los derechos esenciales del estado argentino, y un beneficio para ellas

de más de 20.000.000 de pesos que debieron aportar según esa ley.

No quiero, señor presidente, que se tomen estas palabras como expresiones de un sentimiento de hostilidad hacia las empresas ferroviarias. Siempre mi modesta palabra ha sido emitida en esta cámara en un sentido de conciliación, de concordia, de acción superior del estado como moderador, encauzador y director de todos los intereses, como medidor de todos ellos. Porque, en definitiva, ¿qué es el estado si no el proveedor del derecho, es decir, el proveedor de la regla que mide la acción de los hombres y de las colectividades dentro de la sociedad, que las limita a las necesidades de su conservación y desarrollo, a los fines humanos que los individuos y las asociaciones realizan dentro de la sociedad que los comprende, y que es necesario, que es indispensable para que ellos vivan y prosperen, para que cada uno realice sus fines, por altos que sean?

Así, el pensamiento, coincidente con el de la mayoría de la comisión, que en este momento emito, significa tan sólo el respeto del estado argentino como regulador, como proveedor del derecho, en tanto formas nuevas de organización social no vengán a darnos otra manera de regular las acciones de las personas individuales y colectivas dentro de la sociedad.

La comisión de legislación de la cámara, en nombre de los derechos fundamentales de la sociedad que el estado nacional argentino representa, de esta colectividad que no es de un día, que viene de muy lejos y de muy hondo, que es la obra del esfuerzo de generaciones que vivieron, que vivirán—Dios lo quiera—muchos siglos después de estos días que nos han tocado en suerte, que es superior a nosotros, que vivirá también por la acción nuestra, en nombre de derechos de esta colectividad argentina, que es obra de todos, de los muertos y de los vivos, de los vivos que son y de los vivos que serán, la comisión de legislación habla aquí y dice a las empresas de ferrocarriles: que limiten su acción dentro del orden jurídico de la sociedad argentina; nos-

otros las necesitamos, las estimamos. El estado argentino les ha pagado más de 46 millones de pesos oro como garantía para facilitarles la vida, la acción y la prosperidad; el estado argentino las sostendrá cuando sea necesario, cuando vea que las empresas o las industrias argentinas puedan caducar. Pero que respeten al estado argentino, que no traigan como aporte a la caja de previsión contribuciones ficticias, sino contribuciones verdaderas; que se sometan y vivan dentro de las leyes argentinas, vivan dentro del orden de existencia de esta gran colectividad con la que son solidarias. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! — Prolongados aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Núñez.** — Pido la palabra.

Daré dos palabras respecto del despacho que estamos tratando, por cuanto no obstante llevar mi firma disiento con él en su parte fundamental.

El señor miembro informante de la comisión en su erudito discurso ha manifestado que una de las principales modificaciones introducidas por el honorable senado, es la que se refiere al inciso 1.º del artículo 9.º del proyecto enviado por esta cámara, en cuanto libera a las empresas de la contribución que por la ley básica debían aportar al fondo de la caja. A este respecto el señor miembro informante de la comisión ha fijado la situación de las empresas como levantándose contra las leyes del estado, y oponiéndose al ejercicio de nuestra soberanía.

Desde luego, señor presidente, no me voy a declarar defensor de las empresas. Yo juzgo estos asuntos con criterio de gobierno, y por lo tanto creo que hay dos factores que conciliar y consultar: el capital y el trabajo. No es posible que a base de la soberanía a que se refería el señor diputado Melo, el estado pueda llevar la facultad de legislar hasta afectar la situación financiera y la existencia misma de las empresas establecidas en el país al amparo de nuestras leyes. Es necesario que el capital extranjero goce entre nosotros de toda la confianza y garantía que las leyes acuerdan a todos los

intereses generales y particulares de la nación.

Yo he votado en el seno de la comisión la aceptación de la reforma introducida por el senado en este caso, porque entiendo que el tres por ciento de contribución que debían aportar las empresas por la ley básica, queda compensada con el ocho por ciento que deben aportar ahora según el inciso 5.º del mismo artículo que se acaba de mencionar. Es verdad que ese ocho por ciento de contribución incide en las tarifas, pero siempre ha de incidir sobre ellas, ya sea con la modificación del senado o con la sanción de la cámara de diputados, puesto que este último despacho establece en su artículo 59 que las sumas que las empresas ferroviarias aporten a la caja que crea la ley así como todos los gastos que en cumplimiento de la misma les exijan, serán considerados gastos de explotación de acuerdo con la ley 5315, es decir, que si el gravámen de las empresas por este concepto afecta su capital, suben las tarifas, incidiendo por consiguiente en los precios generales del transporte. Y lo mismo sería que se les autorice a efectuar ese aumento por el ministerio de la ley, o que lo hagan de acuerdo con el artículo 59 previo decreto del poder ejecutivo.

Decía el señor diputado Melo que dentro de poco tiempo, en razón de la inmigración de los capitales americanos, estas empresas tendrán mayor movimiento y mayor rendimiento. Entonces yo argumento que sería el caso de la aplicación del artículo 60, que establece que esta ley debe ser revisada a los tres años, de acuerdo con los censos que deben producirse, para corregir los defectos propios de una ley de ensayo.

Conceptúo que el despacho de la mayoría podría traer consecuencias perturbadoras para la eficacia de la ley. No voy a sostener que el estado carezca de facultad para legislar a fondo esta materia; pero sí encuentro razonable que las empresas que gozan de concesiones por leyes-contratos puedan, con justo o no justo derecho, llevar el caso a los tribunales, con lo que tendríamos planteadas nuevamente ante

los jueces, las cuestiones que se tratan de dirimir por medio de la ley que se discute.

Creo que es prudente la sanción del proyecto en la forma que viene del senado a fin de que la ley sea práctica, pero creo también que será indispensable su revisión dentro de los tres años que marca el artículo 60, a los efectos de corregir los errores propios de toda ley de ensayo.

Tal es la razón de la disidencia que he marcado en el seno de la comisión respecto al artículo 9.º, inciso 1.º, y el fundamento de mi voto en favor de las modificaciones introducidas por el honorable senado en esta parte, no así respecto al artículo 59 en que coincido con mis colegas de comisión.

Nada más.

**Sr. Bunge.** — Pido la palabra.

Creo haber demostrado repetidas veces el intenso interés que me merecen esta clase de leyes, aún sin mencionar mi proyecto de seguro nacional. Con motivo de la ley de jubilación de los tranviarios, he expuesto los conceptos fundamentales en virtud de los cuales había colaborado en él, y que la diputación socialista apoyaba el proyecto como un paso hacia adelante en el camino del seguro nacional, extendido a toda la clase obrera. No necesito, pues, decir que si comparto en un todo las opiniones expuestas por el señor diputado Melo al pedir en nombre de la comisión el rechazo de las dos modificaciones del senado, es por razones de fondo y sin el menor propósito de obstaculizar en manera alguna la sanción de esta ley.

Las modificaciones que ha introducido el honorable senado, después de un estudio interesante y largo, pero en mi entender inspirado en varios errores fundamentales de concepto, son de tal naturaleza que alteran substancialmente las bases financieras y el concepto social con que la cámara de diputados sancionó la ley de jubilaciones de los obreros y empleados de las compañías de ferrocarriles.

Las principales modificaciones del honorable senado, son de cuatro órdenes.

Ante todo, rebajando la edad para

el retiro en cinco años y reduciendo el tiempo mínimo de servicios a treinta años, se aumentan las cargas de la caja en una proporción considerable, que sorprende a primera vista a quienes no tienen a mano las cifras que analizan los resultados de esa diferencia.

Para los actuales empleados que tienen de veinte a treinta años de edad, esta reducción en el límite de la edad y de los servicios, representa en su seguro un costo mayor del 45 por ciento. Es decir, que para cubrir las mayores erogaciones se necesitará que contribuyan, o los empleados o las empresas o el estado, en una suma mayor en un 45 por ciento que la necesaria para costear los beneficios sancionados por la cámara de diputados.

Eso se debe a las mayores probabilidades de supervivencia que se tienen a los cincuenta años, al mayor número de sobrevivientes en esa edad y al menor tiempo de acumulación. Constituir el capital suficiente para alimentar una renta vitalicia exige por cada cien pesos de renta, de acuerdo con la mortalidad de Buenos Aires, del promedio de su población—que es casi seguramente muy superior a la del conjunto de los ferroviarios, si nos atenemos a la experiencia universal—exige, decía, una contribución de 6,91 pesos al mes, si el retiro es a los 55 años de edad, y hay 35 años de acumulación. Con treinta años de acumulación y la misma edad de vigencia, es necesario contribuir con 9,74 pesos mensuales por cada cien pesos mensuales de pensión vitalicia. Si la edad se rebaja a 50 años, con treinta de contribuciones, como en la sanción del senado, el costo sube a 12 pesos. En cambio, con 32 años de acumulación y una vigencia a los 55 años de edad, como lo establecía la sanción de diputados, el costo es, en término medio de las cifras citadas antes, de 8 pesos mensuales y fracción por cada cien de renta vitalicia.

Estos son los cálculos actuariales hechos por los especialistas a que me he referido en la exposición sobre jubilación de los tranviarios. Son cálculos optimistas, de mínima, y no se ha

tenido en cuenta los gastos de administración. Pero las cargas inmediatas de la caja, representadas por los retiros y las pensiones de viudas y huérfanos a que tendrán derecho aquellos que no han contribuido, o que contribuirán durante muy pocos años, esas cargas quedan aumentadas en mucho más a consecuencia de la sanción del senado. Lo demuestra un cálculo hecho a pedido del señor ministro de obras públicas, y que ha tenido la deferencia de comunicarme, por empleados de la contaduría. Este cálculo es el más optimista posible, porque se ha basado tan sólo en los siguientes elementos: un cálculo de egresos que se limita a suponer que los empleados no recibirán sino su jubilación ordinaria, con treinta años de servicios; y no tiene en cuenta las pensiones a las viudas y a los huérfanos; no tiene tampoco en cuenta la posibilidad de retiros extraordinarios, voluntarios; no tiene en cuenta que los empleados que dejan el servicio gozan del derecho de retirar, si tienen la antigüedad mínima de diez años, las contribuciones que han aportado a la caja. Es verdad que han sido aumentadas en algo las jubilaciones, suponiendo para cada tasa de sueldo el máximo, y no se ha descontado el diez por ciento en las jubilaciones de los empleados que no han contribuido, creyéndose así que se compensan en esa forma los beneficios que no se han tenido en cuenta. En mi entender, no se compensan. Pero, suponiendo que fuera así, tendríamos que la sanción de la cámara de diputados habría representado para la caja, en los primeros diez años de vigencia, una erogación total de cien millones de pesos en números redondos.

La sanción del honorable senado, sobre esas mismas bases de cálculo, representará para la caja una erogación total, en los primeros diez años, que son aquellos que cuestan menos, de 172 millones de pesos en números redondos. Es decir, que esas modificaciones, tan insignificantes en apariencia, esos pequeños retoques que ha hecho el senado, aumentan las cargas de la caja en un 70 por ciento.

Pero al mismo tiempo el senado ha

disminuído los recursos propios de la caja. Los ha reducido al rechazar el inciso 1.º del artículo 9.º de los recursos, que obliga a las empresas a cumplir con la obligación que les impuso la ley básica de abonar el 3 por ciento que no han abonado, más una cierta contribución sobre sus tarifas, más el millón de pesos que se han permitido confiscar del descuento que hicieron en los salarios de los obreros. Esas sumas, según los datos que ha proporcionado a la comisión de legislación el señor ministro, ascienden, para las cuatro principales empresas ferroviarias, a un mínimo de 20 millones de pesos papel, contando los intereses acumulados.

Las cifras de detalle constan en las actas de la comisión. Se inicia, pues, la caja con un capital menor en 20 millones de pesos de aquel que debiera tener según la sanción de la cámara de diputados.

También quedan disminuídos los recursos de la caja por el principio que ha introducido el honorable senado en el inciso 5.º del artículo 9.º, estableciendo que la contribución de las empresas será "única", lo que, combinado con los fundamentos dados en su interesante discurso por el señor miembro informante de la comisión de legislación, señor senador Roca, y por los senadores que intervinieron en la modificación del primitivo texto del inciso, implica virtualmente un convenio entre las empresas y el senado sobre el monto de la contribución, y una limitación de las facultades del congreso para aumentarla en caso de que lo creyera necesario y posible.

Más grave como principio es la tercera enmienda, que ha estudiado el señor miembro informante de la comisión, según la cual se autoriza a las empresas a aumentar sus tarifas directamente, sin requisitos de ninguna clase, y por el monto íntegro de la contribución que nominalmente deben aportar a la caja. Quiere, pues, decir que la sanción del senado hace incidir sobre todo el pueblo de la república, íntegramente, la supuesta contribución de las empresas. Y ellas podrán aumentar sus tarifas sobre los artículos

que deseen, dado que quedan eximidas en este respecto del régimen general de la ley Mitre.

El senado ha introducido, además, una modificación de fondo muy interesante, con la cual estoy de acuerdo en principio, aunque no precisamente por las razones que ha expuesto el señor miembro informante, señor diputado Melo, pero sí por razones en cierto modo coincidentes con ellas. Me refiero a la garantía y a la contribución del estado. Partidarios como somos los socialistas del seguro de estado para todos los trabajadores, con la contribución del mismo estado, por lo cual hemos propuesto en nuestro proyecto de seguro nacional una pensión mínima de vejez e invalidez para todos los trabajadores de la república desde que él entrara en vigencia—esto es, aunque ellos no hayan contribuído para formar el fondo del seguro—pensión que quedaría, por lo tanto, durante los primeros treinta años, a cargo exclusivo del estado, no podríamos oponernos a que éste contribuya a la jubilación de obreros que desempeñan una función tan importante y que tienen, relativamente a los demás, una razón especial para interesarnos en particular: por constituir el gremio mejor organizado, y que ha demostrado por lo tanto una mayor capacidad societaria, una mayor capacidad para hacer un uso inteligente de este nuevo organismo social del seguro nacional. Pero la sanción del senado tiene peculiaridades sobre las cuales deseo llamar la atención de la cámara, a pesar de que no voy a votar en contra de ella, por razones de oportunidad.

Al informar el señor senador Roca sobre este punto, recordó que las empresas habían reclamado la constitución de una caja especial para cada una de ellas por temor de que la situación financiera de las empresas menos prósperas, o cuyos obreros tienen peores condiciones de salud, pusiera en peligro la estabilidad financiera de la caja única, una vez limitada permanentemente la contribución de las empresas a ese ocho por ciento. El señor senador Roca hizo notar que la garantía del estado hacía desaparecer todo pe-

ligro sobre la estabilidad financiera de la caja. ¿Qué significa ésto? Significa que, dado que a la contribución de las empresas se le da el carácter de única contribución, esta garantía del estado es ante todo una garantía a las empresas. Ella significa que en ningún caso deberán contribuir las empresas con un centavo más, y que si hay un déficit en la caja, éste deberá pesar sobre el conjunto del pueblo de la república.

¿A cuánto ascenderá ese déficit con la sanción del senado? Son sumas realmente enormes.

El cálculo de la contaduría demuestra que, sobre las bases con que es instituida la caja de rentas ferroviarias por la sanción del senado, los egresos serían, calculando bajo, como lo he hecho notar, de diez millones de pesos y fracción en el año 1919. Ya en el primer año habría sobre los ingresos solamente un saldo de cinco millones y medio. Pero los egresos siguen aumentando en un millón por año, debido a la acumulación de nuevos pensionados. Su número es calculado también con demasiado optimismo en esta tabla, porque supone para los pensionados una mortalidad global del cuatro por ciento, que corresponde a la edad media de sesenta años de los jubilados por la caja nacional de jubilaciones y pensiones, mientras que la edad media de los jubilados de la caja ferroviaria va a ser, durante los primeros años, de cincuenta o poco más, de manera que su mortalidad será más baja.

A pesar de eso, la progresión es de un millón anual, porque se trata de un aflujo constante de nuevos pensionados, de una corriente que va llenando un depósito, por así decirlo, hasta que se llega a un nivel constante, en el período estacionario, en que el número de los que ingresan cada año es equilibrado por el de los que mueren. Ese período, de acuerdo con la experiencia matemática, llega en el año cuadragésimo de las cajas cuyo número de asegurados es estacionario. Quiere decir, pues, que los egresos irán aumentando *grosso modo* en un millón de pesos al año desde el primer año de vigencia de la caja hasta el año 40, hasta subir a 50 millones de pesos anuales como

mínimum. Ellos serán el año 1929 de 21 millones de pesos, en números redondos, lo que daría así en ese año un saldo pasivo, sobre los ingresos por contribuciones, de cinco millones de pesos. Al llegar a ese año décimo, la situación de la caja sería, sin embargo, la mejor posible, la del período de luna de miel, y habría un pequeño capital excedente. Se puede llamar período de luna de miel el de los primeros veinte años de las cajas de jubilaciones sobre bases empíricas, porque los gastos recién empiezan a aumentar, y parece que todo marcha en el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, habría solamente un capital de 31 millones y medio como máximum. Pero ya en el año undécimo habría aumentado en un millón el saldo pasivo; y en el año décimoquinto este sería de 10.300.000 y habría desaparecido totalmente el capital de la caja.

¿Qué quiere decir eso, señor presidente? Que en virtud de la sanción del senado, las contribuciones aportadas por los obreros hoy jóvenes serán absorbidas en su totalidad por los jubilados en la primera década, que no habrán contribuido o habrán contribuido una insignificancia. Y la caja carecerá en absoluto de capital de reserva. Absolutamente ni un centavo de reserva quedará en ella, a más tardar en el año décimoquinto de su vigencia. Es decir, no se trata de un seguro. A partir de esa fecha quedaría todo reducido a una cuenta de entradas y gastos mensuales, a cargo de los aportes de los obreros y de la contribución del estado, la cual tendría que ser, en el año cuadragésimo, nada menos que de 35 millones de pesos para arriba, al año. No habrá como recursos sino esa contribución del estado de 35 millones de pesos anuales, más los quince millones y fracción de los aportes de las empresas y de los obreros y empleados. Resultaría, pues, que la contribución del estado sería de más o menos "450 pesos al año" por cada empleado y obrero ferroviario. Y el monto total de esa contribución del estado equivale al costo inicial de una pensión de treinta pesos mensuales para cada uno de los trabajadores ancianos.



nos de la república, con la ciudadanía argentina o un cierto tiempo mínimo de residencia en el país.

En virtud de estas circunstancias, pregunté al señor ministro si estaría dispuesto a aceptar un proyecto de ley, que el poder ejecutivo presentara en la misma sesión en que se tratara este proyecto en revisión del senado, derogando el apartado segundo del artículo 8.º de la sanción del senado e introduciendo un nuevo inciso en el artículo 9.º En esa forma se resolvía la cuestión del trámite constitucional y se aseguraban recursos efectivos a la caja por medio de una contribución precisa del estado, iniciada desde el primer año de una suma que propuse fuera equivalente a los descuentos del cinco por ciento sufridos por los obreros y empleados en sus salarios.

Esa contribución habría permitido acumular un capital de sesenta millones, o más, durante los primeros diez años de vigencia de la ley, lo que hubiera sido una mayor garantía de supervivencia de la caja.

El señor ministro accedió en el primer momento; pero al día siguiente declaró a la comisión que había cambiado de opinión por razones que no es del caso mencionar. El resultado de esa sanción, combinado con las palabras con las cuales la fundó el señor ministro en el senado, significa lo siguiente: puede el congreso tranquilamente sancionar esta ley, en la seguridad de que el actual poder ejecutivo, y tal vez el que le siga, no tendrá que pagar nada, o sólo muy poca cosa. El gasto empezará de aquí diez, doce o quince años. Recaerá, pues, "solamente" sobre las generaciones que nos sigan a nosotros. En buen criollo, esta sanción significa, por consiguiente, que "el que venga atrás, que arree".

¿Podrá cumplirse tan amplia como vaga promesa?, me he preguntado yo, señores diputados. No podemos saberlo. Por lo tanto, con bases económicas tan deleznales, se hace evidente que esta ley, tal como está hoy, es una nueva ley-promesa superpuesta a la anterior; es una ley provisoria, que tendrá que ser modificada pronto.

Eso, a mí me parece sencillamente lamentable.

Pero no somos nosotros, miembros de un partido de pequeña minoría, quienes podemos asumir la responsabilidad de su sanción. Cuando llegue el momento de revisar esa ley, cuando vean los obreros ferroviarios que no se habrá podido cumplir lo que se les ha prometido, cuando vean que sus aportes han desaparecido de la caja, y que será necesario hacer cargar a todos sus compañeros de clase con una contribución especial, por las más elevadas tarifas y por impuestos para costear sus retiros, ellos serán los primeros en comprender que ésta ha sido una mala sanción, y en comprender que no son siempre los mejores amigos aquellos que tanto más fácilmente prometen cuanto más dispuestos están a no cumplir.

Deseo hacer notar, antes de terminar, la gravedad del principio sancionado por el senado con respecto al aumento de tarifas, que permite hacer incidir sobre el pueblo en general la contribución que se impone a las empresas por el seguro de sus obreros. Es un principio social, aun dentro de la economía capitalista, que toda empresa debe garantizar a los obreros cuya fuerza de trabajo explota, un mínimo de subsistencia. Eso forma parte del "costo de producción", lo mismo que forma parte del costo de producción el seguro de sus instalaciones contra incendios. Toda empresa debe estar obligada a abonar a sus obreros un salario suficiente para la vida, y como complemento del salario, el seguro de enfermedad, el seguro de accidente, una renta de invalidez y de vejez. Porque no puede considerarse lícito, en caso alguno, que la industria capitalista, una vez que ha explotado a sus obreros durante toda su vida, después de haber consumido su fuerza de trabajo, pueda arrojarlos, como un trapo viejo, como una naranja exprimida de toda substancia.

Por eso el seguro de los trabajadores debe recaer sobre la industria misma, y si es general, sobre el conjunto de las industrias de la nación. No debe

jamás recaer sobre todo el conjunto de la clase trabajadora un beneficio para una parte de esa clase trabajadora. Es un principio antisocial que no puede admitirse, y es un comienzo peligroso el de la actual forma de la ley de jubilación de ferroviarios. Porque mañana pueden venir otros obreros, engañados por este ejemplo, a pedir leyes de jubilación de igual clase, dispuestos a creer que puede exigirse también para ellos una contribución especial al conjunto del pueblo trabajador de la república.

¿Qué resultaría a la larga? Una vez todos jubilados, cada uno a expensas de los otros, en total nadie gana. Es el mismo pueblo trabajador quien, con el sudor y el sufrimiento de cada día, deberá costear sus retiros de vejez.

Es por lo tanto sacrificar el presente al porvenir.

Autores ingleses que se han ocupado de esta cuestión han hecho notar que costear los retiros obreros exclusivamente con contribuciones de la propia clase trabajadora, es un sistema que pone en acción el refrán popular inglés, de "alimentar al perro con su cola". Es retirar de los salarios una determinada suma, para hacer creer a quienes sufren ese descuento que consiguen un beneficio pagándosele luego, con alguna merma por los gastos de administración, bajo forma de retiros.

Creemos, pues, que no debe reincidirse en este principio. Desligando toda responsabilidad, dadas las circunstancias, hemos de votar en favor de la garantía ilimitada del estado, en consideración únicamente al principio de contribución que ella comporta. Pero no podemos votar en favor de la exención a las empresas de toda contribución, porque eso significa transformar a las empresas capitalistas, a quienes se acuerda ese privilegio, en industrias parasitarias a expensas del conjunto del país. Hacer incidir sobre él sus cargas sociales es realmente una de las tantas formas que puede asumir una industria parasitaria.

Ya el mal ejemplo comienza a cundir; ya las empresas de tranvías se han presentado en solicitud al inten-

dente de la capital, — dicen los diarios que el intendente está dispuesto a aceptarlo, — pidiendo un aumento de dos centavos en el precio de los boletos de tranvía, bajo pretexto de la contribución del ocho por ciento que tendrán que pagar para jubilación de sus obreros. Esa contribución representa, si mal no recuerdo, una suma de dos millones de pesos anuales; reclaman, para compensarse de ella, el derecho de exigir del público de la capital una contribución anual de unos siete millones de pesos.

Además, implica esto un inaceptable principio de finanzas, porque significa autorizar a empresas privadas a cobrar un impuesto sobre todo el público para costear sus erogaciones de interés general, que les son ineludibles.

Esta ley, con todos sus graves defectos, señala, sin embargo, en mi entender, el comienzo de una nueva época en la legislación social de la república y en las relaciones entre la clase trabajadora y la clase gobernante. Deseo cordialmente que la lección que esta conquista del gremio ferroviario significa para todo el conjunto de los trabajadores, sea aprovechada por ellos.

Pero conviene poner de relieve el alcance que tiene esta sanción en el espíritu de muchos que la apoyan, y que sintetiza en palabras del señor ministro de obras públicas pronunciadas en el seno de la comisión. Cuando le hice notar yo el monto elevadísimo que para más adelante iba a implicar la contribución del estado, que sería ilimitada según esas bases financieras, tan deleznales, que le ha dado la sanción del senado a la jubilación de los ferroviarios, dijo el señor ministro que las ventajas de la estabilización del personal y de menos huelgas compensaban, en su entender con creces, la doble contribución del público representada por el aumento de las tarifas y por la contribución del estado, aunque ella pasara en total de 40 millones de pesos anuales en el período estacionario de la caja. ¿Son estas las palabras del señor ministro?

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Más o menos, señor diputado.

**Sr. Bunge.** — Yo le observé, en una

conversación cordial, como era la que manteníamos, que eso significaba que el estado argentino pretendía entonces encargarse, mediante promesa formal, de domesticarles gratis sus obreros a las empresas ferroviarias, a expensas de todo el pueblo en general. Yo no comparto esa ilusión del señor ministro. Creo que la conciencia de clase...

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Pero yo no coincidí con la apreciación del señor diputado.

**Sr. Bunge.** — ¡Naturalmente, porque le gusta esa domesticación!

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — No creo que sea necesario domesticar para hacer penetrar en la clase obrera las ventajas de una legislación como esta.

**Sr. Bunge.** — Lejos de ello, creo que a medida que un gremio trabajador arranca, mediante su organización inteligente y su resistencia previsora, mejoras al capitalismo, tanto más está dispuesto a seguir pidiendo; de manera que esta ley no es una garantía de sumisión del gremio ferroviario a sus respectivas empresas, sino que es una garantía de una organización más sólida del mismo y del desarrollo de una mejor conciencia de clase entre sus miembros.

Y deseo que así como hoy se ha interesado por una ley de esta clase una parte tan importante de los obreros como lo son los ferroviarios, veamos mañana a todo el conjunto de la clase trabajadora reclamando el seguro nacional; y ese sí representa, señor ministro, una verdadera sanción de "orden social", en el sentido que podemos dar nosotros a la palabra, para evitar la anarquía y el desquicio social que significa el sufrimiento del inmenso número de trabajadores que hoy se ven hundidos en la miseria a consecuencia de la enfermedad y de la vejez: significa orden social, en el sentido de su organización solidaria para una administración de previsión, y significa orden social en el sentido de aportar recursos eficaces para prevenir un sinnúmero de enfermedades evitables, que hoy no se evitan debido a nuestra anarquía presente.

Hago, pues, votos sinceros, y lo es-

pero, para que la sanción de esta ley sea el primer paso en el sentido de una sanción muy próxima del seguro nacional, y para que los obreros ferroviarios, el gremio más numeroso y mejor organizado, estén dispuestos a colaborar resueltamente a fin de que sus hermanos de clase gocen también de beneficios análogos a los que hoy se les acuerda a ellos. (*¡Muy bien! — Aplausos.*)

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Pido la palabra.

No voy a ensayar una rectificación a las exposiciones de los señores miembros de la mayoría de la comisión de legislación, porque no es del caso. Me voy a limitar a una aclaración de conceptos, para concluir, en nombre del poder ejecutivo, manteniendo en todas sus partes sin modificación la sanción del honorable senado.

Antes de entrar a esta aclaración he de dejar establecido un punto que ha tocado el señor diputado que deja la palabra. El se refiere a que en la primera reunión a que tuve el agrado de concurrir a la comisión, el ministro que habla accedió a modificar esta garantía ilimitada del estado por una garantía limitada, circunscribiendo a una suma determinada de dinero el aporte que el estado debería hacer anualmente.

Debo manifestar al señor diputado que de primera impresión, y dada la resistencia que encontré en la casi totalidad de los miembros de la comisión para aceptar esta garantía ilimitada, me incliné a aceptar esa modificación. Habiendo quedado pendiente ésta para la reunión del día siguiente, en ésta no tuve inconveniente de hacer presente al señor diputado que había reflexionado sobre su proposición, y que me inclinaba decididamente a no aceptarla, por la razón que el señor diputado ha tenido la bondad de callar, y que debo expresar a la cámara.

**Sr. Bunge.** — Tampoco he dado las razones por las cuales el señor ministro en la primera reunión aceptó la modificación. Al omitirlas, simplemente he deseado abreviar mi discurso.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Perfectamente, señor diputado.

De manera que modificando, como tenía que modificar, esa resolución, de-

bí hacerle presente a la comisión que en el espíritu del poder ejecutivo pesaba en forma decisiva lo que podía importar esta modificación en cuanto a que el gremio favorecido por la primera sanción del senado podría atribuirle a un propósito extraño al que había inspirado aquella sanción, que podía suscitar desconfianzas, y que en este sentido, y no teniendo una base científica, matemática, ni financiera siquiera, para establecer una cantidad determinada, no podía deferir a esa modificación, y mantenía, por consiguiente, la garantía ilimitada del estado.

Dejo establecida en esta forma la razón de la no insistencia en la aceptación de la proposición que el señor diputado había formulado, y voy a continuar con una aclaración de conceptos, no con una refutación al discurso erudito del señor miembro informante, que contribuye con un nuevo aporte a doctrinar brillantemente los antecedentes de esta ley, que tiene, desde la iniciación de sus trámites en el proyecto del ex diputado doctor Carlés, algunas de las más destacadas representaciones de la cámara, como son el diputado Gallo y el diputado Bas, que establecieron en su momento las bases fundamentales de esta institución de previsión en favor de los ferroviarios.

Dando por sentado que en gran parte coincido con las apreciaciones del señor miembro informante, debo empezar por hacer las aclaraciones que en mi concepto son necesarias, porque coloquen en su verdadera luz la sanción del senado.

El señor miembro informante de la comisión ha dicho que la ley está plagada de errores. Efectivamente, la impresión llegada a la honorable cámara de diputados está llena de errores materiales, que me he permitido hacer rectificar con el señor presidente de la contaduría nacional y por el distinguido técnico jefe de estadística de la caja de jubilaciones, doctor Arduino, en este cuadro que entrego a la cámara, que es la base de la sanción del senado, y así creo que está salvada la dificultad que el señor diputado en-

contraba, de que si hubiera errores debería volver al senado.

Otro punto fundamental que el miembro informante de la comisión ha tocado y que francamente me ha producido cierta alarma, es el que se refiere a la actitud de las empresas desacatando la ley 9653 y que en su concepto importaría un atentado o algo parecido a la soberanía de la nación.

**Sr. Melo.** — ¿No le molestaría al señor ministro una interrupción?

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — No, señor diputado.

**Sr. Melo.** — Precisamente en estos pliegos que el señor ministro ha tenido la deferencia de entregarme, figura la sanción del senado con el error en el artículo 17.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Pero rectificado.

**Sr. Melo.** — No, señor ministro; aquí se trata de esto: de la diferencia entre 100 y el sueldo y en el inciso 3 entre 300 y el sueldo y no entre 300 y 1.000.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Pero eso será siempre materia de modificación, tomando por base la sanción del senado.

**Sr. Melo.** — Por eso decía que va a tener que volver al senado nuevamente. ¡Ojalá no hubiera necesidad de ello!

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Eso dificultaría quizá la sanción de la ley, y desde luego tengan presente los señores diputados el anhelo unánime que existe por su sanción.

**Sr. Melo.** — Estamos de acuerdo en la necesidad de que se sancione inmediatamente la ley.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Sigo en lo que respecta a la faz jurídica que plantea el señor miembro informante.

Manifestaba el señor diputado que había encontrado en la actitud de las empresas un alzamiento o algo parecido contra las leyes de la nación. Yo no adhiero a esa interpretación, y desde luego no me puedo presentar aquí, por mis antecedentes, como un paladín de ellas.

—Reasume la presidencia el señor presidente don Arturo Goyeneche.

Las empresas, teniendo o no razón, llevaron a la suprema corte la ley, creyéndola inconstitucional, y este poder ejecutivo, señores diputados, ordenó la iniciación de las acciones correspondientes, y es de pública notoriedad el trámite que se ha seguido, y ha aparecido en la prensa de esta capital últimamente el brillante alegato sosteniendo los derechos del estado, producido por el fiscal doctor Nazar Anchorena, de cuyas conclusiones participa en absoluto el poder ejecutivo.

De manera que ni el poder ejecutivo ni el senado han visto en la actitud de las empresas, por descortés o inconveniente que deba juzgársela, un alzamiento contra la soberanía del estado. En todo caso ha sido un recurso que no debió ejercitarse, pero al fin perfectamente consagrado en nuestra constitución.

**Sr. Melo.** — No me he referido, señor ministro, al recurso judicial, sino a las protestas de las empresas y a sus continuas negativas violentas a cumplir con la ley, y a la no formación total del censo de empleados y obreros ferroviarios, y a la retención de lo cobrado de más, como a la cobranza de una comisión a los mismos por las cantidades que depositaban.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Perfectamente, serán formas inconvenientes, pero nunca atentados contra la soberanía del estado.

**Sr. Melo.** — ¿El señor ministro conoce las protestas?

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Me he interesado en conocerlas leyendo con la mayor atención la exposición del señor diputado con motivo de una interpelación hecha a mi antecesor, el ministro de obras públicas doctor Moyano.

Continúo, señor presidente, aclarando el concepto y la razón de ser que ha tenido el senado aceptando la modificación, en cuanto al aporte del ocho por ciento con exclusión de lo que corresponde al inciso 1.º del artículo 9.º de la ley básica.

El honorable senado, coincidiendo con el poder ejecutivo, debió tomar por base el conocimiento perfecto que tiene la verdadera situación financiera de las empresas, y juzgó en consecuen-

cia que ese aporte, dentro de los escasos rendimientos, no de los últimos cuatro años, sino de los precedentes, era un aporte razonable, y que por el momento llenaba las exigencias de la caja. Es por eso que no tuvo inconveniente en aceptarlo.

Debo recordar también que cuando finalizó la gran huelga de 1917, las empresas establecieron que el único aporte que podían ofrecer, dada su situación, era el ocho por ciento. En consecuencia el senado no tuvo inconveniente en limitar el aporte a la suma establecida, renunciando al tres por ciento, me parece, que representa el aporte a que ha hecho referencia la ley.

**Sr. Melo.** — Tres por ciento como minimum.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Tanto más cuanto que de los informes que el ministerio puso a disposición de la comisión del senado, resultaba que este ocho por ciento en el tiempo transcurrido comprende los aportes que debieron hacer las empresas durante los 40 meses de vigencia de la ley.

Estos informes se refieren a los principales ferrocarriles: Oeste, Central Argentino y Sud, y quiero dejar constancia de algunas de sus cifras.

Según el estado presentado por el ferrocarril Oeste de Buenos Aires, el monto del 3 por ciento de las contribuciones en concepto de sueldos y salarios de los empleados sujetos a la ley, importaba 1875 libras mensuales; el monto del aumento sobre los fletes de cargas durante los mismos 40 meses importaba 1650 libras por mes; el monto de uno por ciento sobre los fletes de encomienda, en el mismo plazo, 150 libras por mes. De modo que estas tres cifras comprenden esos tres renglones del aporte de las empresas, según la ley básica.

Pues bien; esos aportes han sido sustituidos por el ocho por ciento sobre los salarios de los obreros y empleados sujetos a la ley, que representa para el ferrocarril Oeste de Buenos Aires 6.000 libras mensuales. Hay una diferencia bastante importante entre el aporte actual y el que se exigía por la ley básica.

Para el ferrocarril Central Argenti-

no el tres por ciento de contribución sobre los sueldos y salarios durante los 40 meses, representan 5.000 libras mensuales; el uno por ciento de los fletes de carga, 3.500 libras por mes; el uno por ciento sobre los fletes de encomienda 300 libras mensuales; el ocho por ciento de contribución sobre sueldos y salarios, 14 500 libras.

Se ve, pues, una diferencia de más de 6.000 libras mensuales por el nuevo aporte que hacen las empresas.

**Sr. Bunge.** — Que hace el público.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Para el ferrocarril del Sud: 3 por ciento de contribución sobre sueldos y salarios de sus empleados representan 4.000 libras mensuales; el uno por ciento sobre los fletes de las cargas, 3.000 libras; el uno por ciento de flete de encomiendas, 400 libras, y el ocho por ciento con que contribuye representa 12.000 libras por mes.

Quiere decir, que del punto de vista del concurso de las empresas no me parece que haya ninguna objeción sería que hacer, desde que, como lo demuestran estas cifras que comprenden las principales empresas, queda comprendido en el ocho por ciento el aporte que debieron hacer y no hicieron.

Otro punto de vista, y éste es fundamental, señor presidente, que me propongo rectificar porque sobre él han hecho una apreciación los señores miembros informantes de la comisión, es el referente a saber sobre quién incide este ocho por ciento. ¿Incide sobre el público? Desde luego, todo aumento de tarifas incide sobre el público.

**Sr. Melo.** — Directa o indirectamente.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Directa o indirectamente; pero en el caso de la situación de las empresas, con arreglo a lo que constituye su derecho de sacar de las tarifas un rendimiento para su capital del 6.80 por ciento, este aumento incide, como he dicho, sobre el público o sobre lo que deben cobrar y tienen derecho de cobrar las empresas del público. Indudablemente, plantear la cuestión es resolverla. Si las empresas tienen derecho de tarificar hasta obtener el 6.80 por ciento líquido y tarifican y au-

mentan una tarifa para un fin extraño a un rendimiento en su beneficio, renuncian a un beneficio que la misma ley les concede. Desde luego las empresas han podido elevar las tarifas en su beneficio y no lo hacen sino para contribuir con ese aporte a la formación de la caja de jubilaciones. Es, pues, una renuncia de las empresas a un derecho que les acuerda la ley.

**Sr. Melo.** — Cuando termine el señor ministro le voy a hacer notar otra razón.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — De manera que la conclusión lógica, la que en realidad encuadra en la disposición de la ley 5315, es que el aumento incide siempre sobre el público, pero importa una renuncia a un aumento a que las empresas tienen derecho.

Los señores diputados han dicho que las empresas pueden aumentar sus tarifas en una forma discrecional. Me permito rectificar esa afirmación, porque el mismo mecanismo que establece el artículo 59, me parece, excluye esa elevación arbitraria de las tarifas. Las empresas pueden elevarlas al ocho por ciento para obtener la suma necesaria para formar el fondo de jubilación en la parte que respectivamente les corresponde, pero con el control permanente del estado. Y tan es así, que la suma que se obtenga por ese concepto debe ir a una cuenta especial, que en definitiva debe ser conformada cada año, no obstante la intervención continua de la administración de ferrocarriles. Dado el modo en que se va formando ese ingreso, debe ser conformado cada año para que quede constancia expresa de que las empresas, con la intervención del poder ejecutivo, no han sacado de este aumento sino lo estrictamente necesario para hacer frente al fondo de las jubilaciones.

**Sr. Melo.** — Pero ese no era nuestro argumento, como no es el otro. Lo que nosotros decimos es esto: que las empresas aumentan sus tarifas con la autorización de la ley, sin control del poder ejecutivo respecto de las mercaderías sobre que pesan; de modo que esas tarifas son arbitrarias puesto que el estado no puede intervenir para saber sobre qué artículos recae el au-

mento de la tarifa. En el fondo, por esta disposición, resultan las empresas eximidas de la ley Mitre, aunque la ley no lo diga.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Permítame el señor diputado; eso plantea una cuestión nueva, que del punto de vista técnico de la tarificación se resuelve en contra de su tesis.

Parecería que en esta facultad indiscutible de las empresas de aumentar sus tarifas se les diera una forma de llegar a obtener un rendimiento ilimitado, aplicando esa elevación discrecional y globalmente, sin un criterio de clasificación. A este propósito voy a señalar lo que constituye un verdadero aforismo dentro de la técnica de la tarificación: todo aumento de tarifa injustificado, en el sentido de que incida sobre un producto ya recargado, produce una reducción del tráfico.

De manera que cuando las empresas en una forma irreflexiva, aumentan su tarifa sobre un artículo cuyo valor de cambio no admite ese aumento, incurrir en un error que afecta, en primer término, a sus intereses, porque colocan a ese producto en condiciones de no ser transportado, desde que él no traerá beneficios para el productor.

Este es un concepto técnico de la tarificación. Automáticamente, diré, así, la tarificación excesiva con respecto a un producto que no puede soportarla elimina o reduce el tráfico.

**Sr. Dickmann.** — En tal caso no habría que legislar sobre el asunto, ni dar intervención al estado.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Permítame; no confunda, señor diputado.

Esto se refiere al interés de las empresas, porque la intervención del estado representa algo más, mucho más que lo que significa la intervención en la tarifa: representa para el estado una función de soberanía, porque se trata de transportes que hoy por hoy se realizan con las características de un monopolio de las empresas. La intervención del estado, pues, sobre todo esto que puede parecer sólo del interés de las empresas, está siempre autorizado por la característica fundamental de estos servicios.

De ese punto de vista, entonces, la

disposición no afecta en nada lo que constituye el derecho de la tarificación y la forma de intervención del poder ejecutivo.

Dentro, pues, de estas ideas generales, el poder ejecutivo piensa que la incidencia de este aumento en las tarifas no perjudica los intereses generales.

**Sr. Melo.** — Quisiera hacer una observación al señor ministro; pero esperaré a que termine su exposición.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Si necesita alguna aclaración, la haré con el mayor gusto, señor diputado.

**Sr. Melo.** — Sí, señor ministro.

El artículo 59 dice: "A los efectos de la contribución de las empresas quedan éstas autorizadas para aumentar sus tarifas en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponda, abriendo una cuenta especial cuyo movimiento deberán hacer conocer anualmente de la dirección general de ferrocarriles". Dice: "hacer conocer anualmente"...

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Permítame el señor diputado una aclaración: desde el momento que ese artículo no contiene ninguna restricción respecto de la dirección de ferrocarriles para intervenir en el aumento de esa tarifa, quiere decir que ella tendrá que aumentarse con sujeción a las disposiciones pertinentes de las leyes 2873 y 5315, que no han sido derogadas.

**Sr. Melo.** — Esa es una interpretación que da el señor ministro a ese artículo; pero lo que dice este artículo es que las empresas están autorizadas para aumentar las tarifas y que abrirán una cuenta especial, haciendo conocer anualmente su movimiento a la dirección general de ferrocarriles, la que será examinada y conformada por ésta a los efectos del artículo 53 de la presente ley; es decir, solamente para eso. Y el artículo 53 de la ley dice que las empresas ferroviarias estarán obligadas a suministrar al directorio de la caja todas las informaciones que solicite sobre el personal y a permitir las comprobaciones que juzgue pertinentes, bajo apercibimiento y pena de multa variable entre 500 y 2.000 pesos.

De manera que no resulta claro que las empresas queden sometidas a la ley general de ferrocarriles y a la justicia y razonabilidad de sus tarifas.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Es evidente.

**Sr. Melo.** — No, señor ministro.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — No hay en el artículo ninguna disposición que restrinja las facultades del gobierno en el sentido de autorizar a las empresas a la supresión de la publicidad de sus tarifas y de sujetarse a todos los requisitos de la ley 2783. Eso en cuanto a los requisitos de publicidad; en lo que respecta a la justicia y razonabilidad, este es un caso en que desde luego el poder ejecutivo ha debido deferir, persuadido de que un aumento tan insignificante, como el que resultará para hacer frente a la formación de esta caja, no incidirá en una forma sensible sobre la población.

**Sr. Melo.** — Pero ¿sobre qué va a ser el aumento? ¿Respecto de qué productos? Esa es la cuestión. El poder ejecutivo no puede hacer absolutamente nada según este despacho del senado.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Permítame el señor diputado.

Tendrá que ser sobre lo que se hace invariablemente el aumento de las tarifas. Explicaré brevemente cómo se hace el aumento de las tarifas. Las empresas — y el señor diputado lo ha visto en la última resolución del poder ejecutivo — no han obtenido la autorización para un aumento global; sin embargo, cuando un producto da facilidades para aumento, dentro de cierta equivalencia y dentro de cierta reducción de otros productos que no tolerarían ese aumento global, el poder ejecutivo puede autorizar el aumento dentro de un criterio de clasificación, lo cual ya se refiere al régimen interno de la tarifa, es decir, a las relaciones de las empresas con la dirección de ferrocarriles.

**Sr. Melo.** — Pero, señor ministro: el artículo 59 dice otra cosa. Dice que las empresas quedan autorizadas para aumentar sus tarifas en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les correspondía, para hacer incidir sobre las tarifas el tan-

to por ciento, y que comunicarán anualmente la cuenta a la dirección general de ferrocarriles.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — La ley no establece nada contra lo que ya está determinado en cuanto a la organización del contralor a que están sujetas las empresas por la dirección de ferrocarriles. El contralor es permanente.

**Sr. Melo.** — Eso no lo dice la ley, y es por eso que hemos suprimido el artículo.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — La ley no tiene por qué decirlo; para eso están las leyes 2783 y 5315, que aun subsisten.

**Sr. Melo.** — Pero esta ley establece en el artículo 61 que queda derogada toda disposición de otras leyes que se opongan a ella.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Cuando esto representara una derogación de la ley. La disposición a que me refiero no tiene más objeto que el de que, llegado el año, la dirección de ferrocarriles, que ha seguido el movimiento de la cuenta, controle el balance de verificación de saldos para establecer si las empresas se han limitado a pedir a la tarifa lo estrictamente necesario, sujetando el aumento a la misma dirección.

**Sr. Melo.** — Tenga presente el señor ministro que cuando el texto de la ley es claro no se puede ir pretendiendo interpretar su espíritu, y que las empresas, que hacen siempre pleito, cuando tienen el medio de hacerlo, sin duda harán la cuestión y creo que el señor ministro perdería.

**Sr. Arámburu.** — ¿Si me permite el señor diputado?

Me parece que el párrafo siguiente del mismo artículo aclara la situación de las empresas con relación a los artículos 8 y 9 de la ley 5315.

**Sr. Melo.** — Se refiere a otra clase de empresas.

**Sr. Arámburu.** — Entonces, al referirse a las empresas de ferrocarriles que no están regidas por los artículos 8 y 9 ¿viene como aclaración?

**Sr. Melo.** — Se refiere a los ferrocarriles de Entre Ríos.

**Sr. Arámburu.** — Quiere decir, entonces, que eso se refiere a los ferroca-



rriles de Entre Ríos, y que no queda derogada por la disposición anterior la ley 5315, que hace esa excepción, y la menciona expresamente.

**Sr. Melo.** — Se refiere al 6.80 solamente establecido en el artículo 8 del decreto reglamentario de la ley Mitre.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — A la contribución también. Se refiere a la ley 5315.

De todas maneras, señor presidente, siento no coincidir con el señor diputado...

**Sr. Melo.** — También lo siento mucho yo, señor ministro.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — ...en cuanto al alcance que le da.

Me parece que, en síntesis, desde que esta ley no contiene una suspensión, no contiene una derogación, no contiene nada que roce la vigencia de las leyes 2873 y 5315; éstas, subsistentes como están, autorizan al gobierno, y así lo hará, a exigir a las empresas el cumplimiento de todos los requisitos que estas leyes establecen para el aumento de las tarifas. Ese es el verdadero alcance, si me permite el señor diputado, que le ha dado el senado al aceptar la supresión indicada por el ministro que habla, de la parte aquella que se refería a la facultad del aumento sin sujeción a tales disposiciones de la ley 2873 y 5315 que, en realidad, no tuvo otro alcance que el de evitar a las empresas la publicidad y el término para la vigencia, en razón de lo urgidas que manifestaron hallarse para llegar a formar el recurso necesario para hacer frente al aporte que la ley les exige.

De manera que esa supresión del senado importa, en concepto del poder ejecutivo, la plena vigencia de estas dos leyes que el señor diputado cree derogadas.

**Sr. Melo.** — Pero, señor ministro: si eso hubiera sido así, el honorable senado hubiera adoptado el artículo 59 que sancionó la cámara de diputados, respecto a la autorización a las empresas y a la vigencia de la ley general de ferrocarriles.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — ¿El señor diputado dice el artículo 59?

**Sr. Melo.** — Sí, señor ministro.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — No es incompatible, señor diputado; es perfectamente concordante.

**Sr. Melo.** — Este artículo es el que correspondería adoptar. Por eso es que la comisión lo aceptó.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — ¿Si me permite el señor diputado?...

Con el artículo o sin el artículo, esto siempre será un gasto de explotación. Y piensa más el poder ejecutivo: piensa que está incluida en esta redacción del artículo 59 la parte que el señor diputado cree suprimida del proyecto de la cámara.

**Sr. Melo.** — Entonces no se necesitaba el artículo 59.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Quería dejar constancia expresa — y así tiene que ser, señor diputado, — de que la incidencia de este gasto no podía ser en forma alguna si no sobre los gastos de explotación.

**Sr. Melo.** — Es lo que dice la sanción de la cámara de diputados.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Es el concepto de la ley 5315 y de su decreto reglamentario, porque no sé si el señor diputado tiene presente que el decreto reglamentario de la ley 5315 considera como gastos de explotación las sumas que para beneficencia entreguen las empresas.

De manera que, si no he podido desvanecer por completo las dudas del señor diputado, y lo lamento, quiero y debo dejar constancia de cuál es la verdadera interpretación de este artículo: de que no se puede aceptar como derogatoria de la ley general de ferrocarriles y menos de la 5315.

**Sr. Méndez Casariego.** — ¿Me permite una interrupción el señor ministro?

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Méndez Casariego.** — Me parece conveniente, tratándose de un asunto que por su naturaleza puede en la interpretación posterior de la ley traer dificultad, fijar bien claramente el concepto de este artículo, estableciendo una situación perfectamente definida, y que yo la veo expresada con confusión tanto del lado del señor ministro como del lado del señor diputado.

Melo. Por más que me consta que, en el fondo, el señor ministro está de acuerdo conmigo, me parece, dada la forma en que él se ha expresado, que va a quedar en la discusión de este artículo una confusión, que yo quiero dejar, de mi punto de vista, bien eselarecida.

Siempre que se trata aquí de la interpretación de la ley de ferrocarriles, en cuanto se refiere a tarifas, o siempre que se trata de tarifas en cualquier incidencia de una discusión, se incurre en el mismo error.

La subsistencia de la ley fundamental, de la ley general de ferrocarriles, no ha sido alterada ni por la ley 5315, comúnmente llamada ley Mitre, en cuanto se refiere a tarifas, ni tampoco por esta ley que deroga las disposiciones que la contradicen, pero no las que le son concordantes, las cuales se mantienen y se pueden aplicar conjuntamente con esta ley.

Si se aplicara el criterio del señor diputado Melo, resultaría que por la ley 5315, en cuanto establece la facultad del poder ejecutivo para intervenir en las tarifas después que las empresas produzcan el 12 por ciento del capital, estaría inhabilitado hoy el poder ejecutivo para intervenir en ellas, porque ninguno de los ferrocarriles ha llegado a ese límite. Sin embargo, el gobierno interviene en la aprobación de las tarifas sin que las empresas hagan objeción alguna; ellas reconocen y acatan el derecho del poder ejecutivo, dentro de ese artículo, de estudiar las tarifas y apreciar si son justas y razonables. Por consiguiente, dentro de esa frase tan lacónica, pero al mismo tiempo tan expresiva, el poder ejecutivo, si no considera justa y razonable una tarifa, la excluye sin más requisitos.

Es con ese criterio que últimamente el poder ejecutivo ha rechazado el aumento de un diez por ciento que las empresas proponían para sus tarifas. ¿En qué se fundaba el poder ejecutivo? Se fundaba en que la forma en que presentaron las empresas su pedido importaba un aumento global sobre todas las tarifas. Ese aumento, que podía ser justo y razonable con relación a una mercadería determinada, podía

ser injusto y no razonable con relación a otra. El poder ejecutivo admitió y reconoció que las empresas, en principio, y con arreglo a los contratos y a las leyes vigentes, podían aumentar las tarifas, pero que era necesario que cada tarifa fuera individualizada y presentada así a su estudio y en esa oportunidad declararla justa y razonable.

Este principio que contiene la ley de ferrocarriles argentinos, demasiado breve tal vez, es una verdadera arma en manos del poder ejecutivo y es superior a todas las leyes extranjeras, por cuanto las demás entran en un orden de reglamentación que muchas veces ata las manos del gobierno.

He tenido oportunidad de decir en la comisión, en presencia del señor ministro de obras públicas, que tenía proyectado y listo para presentar, hace algunos años, un proyecto de ley de tarifas; pero siguiendo el hábito de controlar mis opiniones con las de otras personas a quienes considero más autorizadas, conversé y expliqué mi propósito al señor Schneidewind, profesor de tarifas de la Facultad de ingeniería, director entonces de ferrocarriles de la nación, — y que ha escrito un libro sobre tarifas que ha merecido del gobierno alemán una medalla de oro — para que él me diera su opinión respecto a la conveniencia de dictar esa ley. El señor Schneidewind me dijo: “nada es más grande, más elástico ni más eficaz que lo que tiene hoy la ley básica, la ley de ferrocarriles”.

La prescripción de que las tarifas sean, a juicio del poder ejecutivo, justas y razonables, pone en manos del poder ejecutivo todo el poder en materia de tarifas.

Entonces, pues, en el presente caso, establecer que las empresas tienen el derecho de aumentar las tarifas a los efectos de subvenir a los gastos que demande la aplicación de esta ley, no importa poner de lado la ley fundamental, ni tampoco el artículo último de la ley lo hace, porque simplemente establece que se derogan las disposiciones que se oponen, y ésa no se opone; es concordante, es complementaria.

Quería manifestar estos hechos, porque me parece conveniente que queden

expresados en esta forma clara, para disipar cualquier duda de los señores diputados, y porque explican en mi concepto la permanencia de este artículo, que estoy seguro no puede traer dificultades de ningún género. (*¡Muy bien!*)

**Sr. Melo.** — La interesantísima exposición del señor diputado, como la del señor ministro, son precisamente la demostración de que estaba bien el artículo 59 sancionado por la cámara de diputados, por lo que espero que los señores diputados se habrán convencido de que ese artículo es el que se debe votar, y no el sancionado por el senado.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Continúo, señor presidente.

Adhieró en todo a la opinión que acaba de emitir el señor diputado Méndez Casariego como interpretativa del verdadero alcance del artículo. Ese es el concepto con que el poder ejecutivo lo ha aceptado, y pienso que en forma alguna roza las dificultades que le da la ley básica, 2873, en cuanto al derecho de intervenir las tarifas, en el sentido de declarar su justicia y razonabilidad.

El señor diputado Bunge ha hecho un estudio detenido de la parte financiera de la caja en la forma sancionada por el honorable senado. Efectivamente, los cálculos hechos por el presidente de la contaduría nacional, y por el jefe de la contaduría de jubilaciones, doctor Arduino, han establecido que la caja tiene asegurada su existencia por doce o quince años. Con esta seguridad absoluta, que el mismo señor diputado ha reconocido, el poder ejecutivo no puede tener inconveniente en prestar su garantía en la forma en que la ha prestado, desde el momento que el estudio definitivo que ha de dar base a la ley, también definitiva, basado en un censo de empleados completo, en datos estadísticos que no hay en ninguna parte, y en una palabra en todos los elementos actuariales que son indispensables para una ley de esta naturaleza y trascendencia, se hará dentro de tres años.

Ha debido deferir entonces el poder ejecutivo a la sanción de esta ley pues-

to que es una necesidad impostergable, y en la absoluta seguridad de que dentro de los tres años se harán todos los estudios para llegar a la ley definitiva.

Por estas razones el poder ejecutivo insiste en manifestar la conveniencia de que se acepten las modificaciones del honorable senado sin ninguna exclusión.

**Sr. Bunge.** — Pido la palabra.

Deseo rectificar brevemente algunas de las consideraciones formuladas por el señor ministro.

Al empezar su exposición, manifestó que rechazar alguna de las modificaciones introducidas por el senado significaba dificultar la sanción de la ley, y en esa forma defraudar un anhelo público. Me parece que estas palabras o se fundan en un error de hecho o son una mera frase de efecto.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — No ha sido propósito del ministro que habla, producir ninguna frase de efecto.

**Sr. Bunge.** — No sé cómo se puede dificultar la sanción de una ley con motivo de que vuelva al senado, por haberse modificado dos puntos de los muchos en que ha intervenido ese cuerpo modificando la primitiva sanción de esta cámara.

Todos los años, al discutirse la ley de presupuesto, — cuando se discute — vuelven las modificaciones del senado a la cámara de diputados y de ésta, si no se aceptan, vuelven nuevamente al senado. Es un trámite ordinario que no ha dificultado jamás la sanción de esa ley, mucho más compleja que cualquiera ley parcial de este género.

Ha demostrado el señor diputado Melo que esta ley no caducará en el plazo de días que algunos suponen, pues tiene plazo por un año más. Hay antecedentes que lo corroboran. Al discutirse la ley básica de jubilación de ferroviarios quedó claramente establecido que una sanción del senado prorrogaba la vigencia del proyecto por un año más, y fué sancionado el despacho por ambas cámaras, pasado el plazo que, de acuerdo con la interpretación restrictiva de la ley Olmedo, determina la caducidad de los proyectos.

No comprendo que pueda significar

“defraudar un anhelo público” el postergar durante unos pocos días la sanción de una ley en defensa de principios fundamentales que debe mantener la cámara, que es indispensable los mantenga, no sólo en salvaguardia de la soberanía del estado, sino de los principios sociales que anulan esas modificaciones del senado. No puede, pues, decirse que con su rechazo se defrauda un anhelo público, sino todo lo contrario. El anhelo público quedaría más lealmente servido sancionándose el despacho de la comisión de legislación, que se ha inspirado exclusivamente en el interés público, y que aunque interpreta los legítimos intereses de los ferroviarios no está dispuesta en ningún momento a otorgar promesas que no se pueden cumplir, ni a sacrificar a la satisfacción de intereses particulares los intereses generales. Es lo que sucedería dando carta blanca a las empresas para eludir definitivamente la obligación, que no han cumplido, de depositar más de 20 millones de pesos en la caja de jubilaciones, y para descargarse de toda obligación de contribuir al seguro de su personal.

Ha dicho luego el señor ministro que había cambiado de opinión sobre mi propuesta, de que el estado contribuyera desde el principio de la vigencia de la ley con una suma equivalente al cinco por ciento del salario de todos los empleados y obreros, porque era una contribución “limitada”. Es evidente que toda contribución de una cantidad determinada tiene un límite, pues es una cantidad precisa; en cambio, el agregado del senado significa una cosa vaga, completamente en el aire. Positiva era mi propuesta, desde el momento que implicaba una contribución definida, que habría determinado un aporte de más de 60 millones a la caja durante los primeros diez años de vigencia; era una garantía que permitiría cumplir efectivamente las promesas de esta ley durante un período de 25 años.

Además, no significaría ninguna gravosa erogación para el actual poder ejecutivo, porque se proponía que la contribución se hiciera por medio del depósito de títulos; de manera que la contribución en efectivo hubiera au-

mentado gradualmente, a medida que se acumulara mayor capital y aumentara en proporción el monto de los intereses.

En cuanto a la interpretación que han hecho el señor diputado Méndez Casariego y el señor ministro del artículo 59 del senado, pienso como el señor diputado Melo, que ella corrobora las ventajas del artículo sancionado por la cámara de diputados, artículo que es perfectamente claro y explícito, pues declara gasto de explotación las erogaciones de las empresas por concepto de esta ley, sin autorizarlas directamente a aumentar sus tarifas en cualquier caso, pero concediéndolo bajo las condiciones de las leyes generales que las rigen.

Al sostener ahora el señor ministro el artículo del senado, que autoriza explícitamente a las empresas a aumentar sin cortapisas sus tarifas desde el momento que entre en vigencia la ley, encuentro una extraña contradicción en el criterio del poder ejecutivo.

Hace poco tiempo consideró el poder ejecutivo que no era “razonable”, de acuerdo con la ley general de ferrocarriles, un aumento en las tarifas para el cual solicitaron autorización las empresas, siéndoles, ella denegada. En cambio, hoy, que la situación financiera de las empresas es mucho mejor, porque sus entradas brutas han aumentado considerablemente y porque, terminada la guerra, disminuirán los gastos de explotación, que habían aumentado notablemente a causa de la carestía y también de las huelgas, ahora, digo, que la situación de las empresas va a mejorar, sería menos “razonable” todavía, de acuerdo con el criterio que tuvo el poder ejecutivo, un aumento de sus tarifas.

Según el artículo 59 del senado, las empresas podrán aumentar sus tarifas en la suma de sus aportes, sin que el poder ejecutivo pueda denegarles la autorización por razón alguna. Eso es evidente, desde que se les otorga una autorización especial.

Creo, señor presidente, que aunque los rechazos que propone la comisión de legislación sólo atenúan débilmente los malos efectos de esta ley, en la forma en que ha venido del senado, es

indispensable aprobarlos, porque sancionar la ley sin esas reservas significa instituir una caja condenada de antemano a una segura bancarrota. Implica, además, intervenir en un proceso pendiente ante la justicia, entablado por el poder ejecutivo, y que según el señor ministro es una causa ganada para el estado argentino. Así lo ha declarado en la comisión de legislación.

**Sr. Ministro de Obras Públicas.** — Y lo confirmo.

**Sr. Bunge.** — Renuncia, pues, el poder ejecutivo a la sanción por la justicia argentina de un principio de importancia fundamental, que es el de que estas leyes no son tales leyes-contrato, sino leyes que obligan sin condiciones a las empresas sujetas a su imperio.

Por último, no mantener la sanción de la cámara de diputados y votar el artículo 59 como viene del senado, significaría incorporar un nuevo principio antisocial a nuestro sistema general de legislación, agregando un privilegio más a los muchos de que gozan las empresas ferroviarias, y que les fueron acordados cuando se consideró necesario estimularlas por todos los medios, debido al atraso económico y cultural del país. Significaría establecer el principio de que las empresas capitalistas a las cuales las leyes sociales del estado argentino impusieran obligaciones especiales, tendrían el derecho de descargarse de esas obligaciones, arrogándose la facultad de hacerlo por medio de impuestos sobre todo el público que ellas sirven.

Creo, pues, que lo mejor y lo menos que puede hacer la cámara, es aceptar el despacho de la comisión de legislación.

**Sr. del Barco.** — Que se vote.

—Después de unos momentos de espera para formar quórum:

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — La presidencia entiende que en este caso no corresponde una votación general, porque no es posible. Se votarán los artículos observados por el senado en cada caso, a no ser que los señores diputados quieran establecer una votación en general para todos aquellos ar-

tículos cuyas modificaciones son aceptadas por la comisión.

**Sr. Melo.** — Se puede hacer una votación general, porque la mayor parte de las modificaciones del senado han sido aceptadas.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — ¿La votación en general daría por resultado que se aceptan todas las modificaciones?

**Sr. Melo.** — Se aceptan o rechazan en general, pero en particular es cuando...

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Se van a votar, artículo por artículo, las modificaciones.

**Sr. Bunge.** — Al discutirse hace poco un proyecto venido en revisión del honorable senado, la cámara resolvió que desde que era la primera votación, se votaría el despacho de la comisión.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — No, señor diputado; la cámara no resolvió nada; se hizo una observación por parte de un señor diputado respecto de la forma en que se debía verificar la votación. El diputado manifestaba que la forma de votarse era si se aceptaban o no las modificaciones del senado.

**Sr. Bunge.** — Hago indicación, entonces, para simplificar, de que se lean los números de los artículos en que hay modificaciones del senado aceptadas por la comisión, y que cuando haya modificaciones rechazadas por la comisión, se lea esa modificación y el artículo original.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Perfectamente; así se hará si no hay oposición por parte de la honorable cámara.

—Asentimiento.

**Sr. Secretario** (González Bonorino). — Al final del inciso 1.º del artículo 2.º: “y los del cable-carril de Chilecito a la Mejicana”...

**Sr. Bunge.** — Había hecho indicación de que no se leyera la modificación del senado cuya sanción aconseja la comisión y que se enunciara simplemente el número del artículo.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Exactamente; si no hay oposición, así se hará; de tal suerte que la primera modificación es la del inciso 1.º del artículo 2.º

Si no se hace uso de la palabra se dará por aprobado.

—Aprobado.

—Se aprueban los artículos 3.º a 8.º inclusive.

—En discusión el inciso 1.º del artículo 9.º

**Sr. Bunge.** — Debería darse lectura del inciso original sobre el cual la comisión aconseja la insistencia.

—Se lee:

“Con los aportes que establecen en sus artículos 4.º y 6.º de la ley 9653 hasta la promulgación de la presente ley.”

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

Debo hacer notar, además de todo lo que hemos expresado, que la sanción del senado significaría eliminar definitivamente la contribución de parte de las empresas según la ley básica, y que la ley orgánica nueva, que deberá dictarse dentro de tres años, no podrá ya remediar la eliminación.

**Sr. Dickmann.** — Desearía saber cuánto es lo que las empresas no han pagado.

**Sr. Melo.** — Más de veinte millones de pesos.

**Sr. Dickmann.** — Entonces, según esa modificación del senado, se le ceden veinte millones a las empresas.

**Sr. Bunge.** — Más, porque esa suma sólo se refiere a las cuatro principales empresas y además porque se han quedado con cerca de un millón de pesos provenientes de la contribución de los obreros y que las empresas confiscaron. Son más de veinte millones de pesos, y se trata de un principio fundamental que quedaría derogado si se acepta la modificación del honorable senado.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Se va a votar si se acepta la modificación del honorable senado.

—Resulta afirmativa.

—Se da por aprobado el resto del artículo 9.º y el artículo 11.

—En discusión el artículo 17.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

Debo observar que existe un error

en la sanción del senado que es bueno que la cámara tenga en cuenta.

La comisión no ha tocado los incisos 2.º y 3.º, modificados por el senado porque entendió en mayoría que la cámara no los puede modificar; pero puede suceder que la cámara entienda que puede hacerlo.

Formulo esta aclaración para evitar cualquier dificultad, ya que veo existe en la cámara mayoría hecha para aprobar las modificaciones del senado, lo que me explico teniendo en cuenta las palabras de un viejo parlamentario inglés que decía: “He oído muchos discursos en mi vida; algunos de ellos me han hecho modificar mi opinión, pero nunca mi voto”. (*Risas*).

Entonces, para que no haya dificultades y este proyecto no tenga que ir al senado, observo que hay un error en los incisos 2.º y 3.º, sancionados por éste. Se da por ellos igual jubilación a un empleado que gana 102 pesos y que contribuye con el cinco por ciento de su sueldo que a un empleado que gana 290 pesos y contribuye con el cinco por ciento de éstos; e igual jubilación al que gana 302 pesos contribuyendo con el cinco por ciento de éstos que al que gana 950 pesos, contribuyendo con el respectivo cinco por ciento. Así, en vez de “trescientos pesos” al final del inciso 2.º debe decir: “el sueldo” y debe decir también “el sueldo” en lugar de “mil pesos” al final del inciso tercero.

**Sr. Gibert.** — Respecto de este punto debo hacer presente que el despacho de la comisión en la nota de la página 551, llama a esto error de redacción. De manera que existe esta manifestación de la comisión.

Es un error perfectamente comprensible ante el texto mismo de los incisos porque no se explicaría que a una suma fija se le agregara un porcentaje que vendría a ser otra suma fija.

**Sr. Melo.** — Es un error de redacción y de sanción.

Ahora, lo que yo deseaba proponer es esto: que la cámara resuelva si cree que puede hacer una modificación a la modificación hecha por el senado.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — No, señor diputado.

**Sr. Bunge.** — Tomando a la letra este artículo, resultaría que empleados con 301 pesos de sueldo tendrían derecho a más de 600 pesos de jubilación.

**Sr. Melo.** — ¡Es una enormidad!

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — La modificación al artículo 17 introducida por el senado ¿está aceptada por la comisión?

**Sr. Melo.** — Es que la comisión en mayoría pensó que la cámara no puede hacer modificación en las modificaciones introducidas por el senado, y que no podía hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas y se limitó a advertir estos errores en una nota al despacho que los señores diputados pueden leer en el final de la orden del día número 64.

**Sr. del Barco.** — Permítame el señor diputado.

La nota a este artículo ¿la propuso tal cual está en el despacho el señor diputado, o es un error de redacción?

**Sr. Melo.** — Es un error de redacción y de sanción. De redacción de la proposición, y de sanción del senado, porque el espíritu del señor senador proponente era éste: que se pusiera el “sueldo” en vez de “300 pesos” y “1.000 pesos”, respectivamente, en los incisos 2.º y 3.º.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — No puede haber un error de sanción.

**Sr. del Barco.** — Es un error de redacción.

**Sr. Melo.** — Se ha sancionado por equivocación.

**Sr. Ferrarotti.** — Pero si este proyecto vuelve al senado, tampoco podrá modificarlo.

**Sr. Melo.** — Entiendo que nosotros podemos modificarlo.

**Sr. Bunge.** — Pido la palabra.

El antecedente respecto de este artículo es el que sigue.

El señor senador Torino propuso que en vez de otorgárseles a los empleados que ganan de 100 a 300 pesos una jubilación, por la suma mayor de cien pesos, equivalente al 65 por ciento de la diferencia entre el sueldo y cien pesos, se elevara esa proporción al 80 por ciento y que a los empleados cuyo sueldo es de 300 a 1.000 pesos, en vez de acordárseles la jubilación por la

cantidad superior a la correspondiente al sueldo de 300 pesos a razón del 45 por ciento de la diferencia entre el sueldo y 300 pesos, se les otorgara por el 70 por ciento de la diferencia.

Fué, pues, una moción para favorecer a los empleados de altos sueldos, tendiente a aumentar considerablemente el tanto por ciento de la jubilación que les acordaba la cámara.

Me parece que el error de redacción podría salvarse fácilmente con esta aclaración, desde que es evidente que se trata de un error de hecho, y que el único propósito de esta modificación es aumentar el tanto por ciento de la jubilación para los empleados de más de cien a mil pesos de sueldo, pero no llegar al absurdo que se deduce literalmente de la forma de la sanción del senado, de que un empleado de trescientos pesos de sueldo pueda llegar a tener una jubilación de más de 700 pesos.

**Sr. del Barco.** — Indudablemente se trata de un error.

**Sr. Maidana.** — Sería curioso saber quién es el redactor del senado para llamarlo al orden o felicitarlo por su habilidad. (*Hilaridad*).

**Sr. Melo.** — La cámara resolverá. Yo he propuesto la cuestión, porque podríamos entonces efectuar la modificación y saldría la ley.

**Sr. Avellaneda (N. A.).** — No se puede modificar.

**Sr. Gallegos Moyano.** — Pido la palabra.

El señor diputado Melo propone que la cámara modifique la sanción del senado, porque entiende y sostiene que hay un error de redacción o de sanción, de todas maneras, siempre un error. Y resultaría, por la explicación que ha dado el señor diputado Bunge, que sería nada menos que jubilar con 600 pesos...

**Sr. Bunge.** — Con 700.

**Sr. Gallegos Moyano.** — ...cuando no se puede jubilar sino con 300.

El señor diputado Melo decía que eso sería una modificación en la forma; pero, por las mismas explicaciones que se dan aquí, resulta que no es una modificación en la forma, sino en el fondo: nada menos que se modifica una

sanción del senado, que equivocada o no, tendremos que aceptar. Al menos ese es mi concepto.

Respecto de que se siente este precedente de que la cámara de diputados pueda introducir modificaciones que, a su juicio, parezcan de forma, me parece que el criterio respecto a este punto es muy lato; podría resultar que, según nuestro criterio, las modificaciones fueran de forma y lo fueran de fondo también, a su vez, con lo que se introduciría en la sanción del senado un principio de completo desorden, porque no habría sanción definitiva, sino cuando la otra cámara revisora estableciera que no hay ningún error ni de forma ni de fondo.

Yo creo que el principio de mi distinguido maestro, doctor Melo, es muy peligroso, para que la cámara lo adopte en este momento, y aunque la sanción del senado, como se ha dicho aquí, es mala, ya vendrá la oportunidad justamente de corregirla, y si hay buen criterio en los encargados de aplicarla, me parece que la resolución de esta cámara, que es a su vez fuente informativa para interpretar las leyes y la discusión que se ha hecho en este momento respecto a esta anomalía de la sanción del senado, si es que resulta exacta en los hechos, será suficiente para que no se conceda una jubilación con esa enormidad que encierra el despacho de aquella cámara.

Por estas razones, votaré el despacho del honorable senado.

**Sr. Maidana.** — Yo creo que la comisión ha podido hacer antes ese trabajo, de ver si eran errores materiales o si eran errores fundamentales, porque parece que son errores materiales.

**Sr. Gibert.** — Pido la palabra.

Yo entiendo, señor presidente, que la honorable cámara puede votar estos dos incisos en la misma forma en que están, con los errores con que vienen del senado, sin que esto pueda tener la trascendencia que le da el señor diputado Bunge.

Es bien sabido que la interpretación de la ley, cuando es oscura, la da el Diario de Sesiones.

En esta sesión, se han presentado por el señor diputado Bunge, las ar-

gumentaciones hechas en el honorable senado, fundamentando estos incisos, según los cuales el espíritu tenido en cuenta y la voluntad del senado en su sanción ha sido establecer una cantidad fija para los sueldos de 100 a 300 pesos; estableciendo 95 pesos, más el 30 por ciento de la diferencia entre 101 y el sueldo que tiene, es decir, entre 100 y 300 pesos; y para los sueldos de 300 a 1000, otra cantidad fija de 255 pesos, más el 70 por ciento de la diferencia entre 301 pesos y el sueldo que tienen.

De manera que, en ese proyecto sancionado por el senado, si bien aparece un error numérico, que resulta incomprendible, ese error queda salvado con esta discusión y esta aclaración hecha por el señor diputado y que yo también acabo de hacer, por lo cual creo que la honorable cámara puede perfectamente votar el texto tal cual viene del senado, sin perjuicio de que la ley quede bien sancionada.

**Sr. Melo.** — Yo no insisto, pero nunca se podrá aplicar una ley de esta naturaleza que dice expresamente una cosa como si dijese otra muy diferente. Es imposible, señor presidente. No hay interpretación posible. Si dice la diferencia entre ciento uno y mil pesos, y la diferencia entre 101 y 300 pesos, se tendrá que aplicar la ley como está, con esta circunstancia de que ya he hablado: que cada empleado de los ferrocarriles y de los puertos contribuye con el 5 por ciento de su sueldo, y resulta que se va a jubilar al empleado que ha contribuido con menos, en una proporción desmedida a su sueldo y desmedida para la contribución que aporta. Es una verdadera injusticia.

Y agregaré esto; que ya en el viejo manual de Jefferson se decía que en las prácticas parlamentarias inglesas se podía hacer la modificación de la modificación antes de la persistencia, lo que ya he explicado y sobre lo que no quiero insistir.

Así vamos a sancionar una ley defectuosa, injusta, llena de inconvenientes, durante tres años.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — ¿Y por qué la aconseja?

**Sr. Melo.** — La comisión no ha acon-